

PRESENTO DEMANDA

SR. JUEZ DE OFICINA DE GESTIÓN ASOCIADA CIVIL Y COMERCIAL DE TURNO

**JUCIO: CATTOLICA JOANA ELIZABETH C/ PLAN ROMBO S.A. DE AHORROS
PARA FINES DETERMINADOS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS**

NICOLAS SORIA, abogado del foro local, estudio jurídico sito en calle Lamadrid n° 456 7° piso, oficina “C”, de esta ciudad, y constituyendo domicilio electrónico en casillero 20-32132902-1, a V.S. me presento y respetuosamente digo:

I.- PERSONERIA

Que conforme lo acredito con escritura pública pasada por ante escribano soy apoderado de la Sra. CATTOLICA JOANA ELIZABETH DNI: 36.838.287 , con domicilio real en Calle Azcuenaga N° 643 de la Ciudad de San Miguel de Tucumán. - En tal carácter me apersono y solicito intervención de ley. Declaro la plena vigencia y autenticidad del mandato. -

II.- OBJETO:

En el carácter expresado, y atento la calidad de CONSUMIDOR de mi mandante en los términos de la Ley 24.240, modificada por ley N° 26.361 y concordantes, vengo en tiempo y forma a iniciar formal demanda de ACCION DE CONSUMO por daños y PERJUICIOS, en contra de la firma, PLAN ROMBO S.A. DE AHORROS PARA FINES DETERMINADOS con domicilio en calle Fray Justo Santa Maria de Oro N°1744, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la cantidad de Pesos \$**41.704.809 (pesdos Cuarenta y un millones setecientos cuatro mil ochocientos nueve)** ..haciendo expresa reserva de determinarla exactamente en la etapa procesal oportuna, conforme lo detallo más abajo, dejando librada la cuantificación de algunos rubros a su justo criterio su estimación, y también según surja de las pruebas a producirse y la jurisprudencia del presente caso, con más intereses y costas desde el día del reclamo hasta el de su efectivo pago.-

III HECHOS

Mi mandante suscribió con la firma PLAN ROMBO S.A. DE AHORROS PARA FINES DETERMINADOS la adhesión a un Plan de ahorros para la adquisición de un vehículo RENAULT LOGAN mediante la solicitud de adhesión N°2485507, de fecha 29 de marzo de 2017, consecuencia de esta adhesión paso a formar parte del grupo y orden N° G7UH020-H, el plan estaba compuesto de 84 cuotas, opto por el pago del 100% de la cuota

Como suele ocurrir en estos contratos de larga duración, los modelos se suelen discontinuar y pasan a abonar los suscriptores modelos actuales, siendo así en fecha 06 de mayo de 2024, la actora recibe en su domicilio una comunicación de PLAN ROMBO que tenía como encabezado **¡FELICITACIONES! “USTED ESTA A UN PASO DE DISFRUTAR DE SU VEHICULO 0 KM.**

La misiva continuaba diciendo “*Estimado Cliente, su contrato ha sido adjudicado y este es el momento en que podrá juntarse con su 0KM. Estos son los datos referentes a su adjudicación. MODELO ASR5 360. PLAN 100% FECHA DE ADJUDICACION 06 DE MAYO DE 2024, GANADO POR SORTEO*”... ¿ YA ELIGIO EL COLOR DE SU VEHICULO? ¿ CONOCE LOS MODELOS QUE TENEMOS A SU DISPOSICION? POR QUE AHORA LE TOCA ELEGIR. El 0km esta a solo un paso y depende de USTED: la aceptación de la adjudicación.

Si hasta el 28 de mayo de 2024 inclusive no recibimos su aceptación, asumiremos que usted no desea retirar su vehiculo en este momento, por lo que anularemos su adjudicación. **Su concesionario la espera... acérquese.**

Al acercarse al concesionario oficial en nuestra provincia que es **RUIZ AUTOMOTORES SA.** para seguir las instrucciones, la actora en fecha 07 de mayo de 2024 recibe un detalle de que debía abonar la suma de \$5.055.429,54 (pesos cinco millones cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintinueve con 54/00) en concepto de *diferimiento de pago de medida cautelar* promovida por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Tucumán, *DEFENSOR DEL PUEBLO DE TUCUMAN c/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS s/ SUMARISIMO (RESIDUAL) 2702/19.* Lo cual era una condición esencial para proseguir con la entrega del vehículo. Tenia que abonar si o si dicha suma para poder conseguir la entrega.

Siendo una situación que tomo por total sorpresa a la actora, y siendo una suma totalmente aleatoria y sin justificación , recibe en fecha 08 de mayo de 2024 otra carta de PLAN ROMBO, comunicando que resulto “ganadora en el acto de adjudicación del mes de mayo de 2024” *informando que a fin de formalizar la aceptación de la adjudicación debía concurrir al concesionario . Renault a los efectos de realizar el pedido de la unidad, previo pago de las sumas que adeudara por cuotas, cuotas extraordinarias en caso de corresponder y/o conceptos impagos, como asi también del cambio de modelo si fuera solicitado*”

De no ingresar en Plan Rombo antes del 28/05/2024 la aceptación de adjudicación y el pedido de la unidad de su elección asumiremos que Ud. renuncia al plan y no desea retirar el vehículo, por lo que procederemos a anular la adjudicación en forma definitiva.

Habiendo finalizado la vigencia del grupo que integra, la anulación de la adjudicación será irreversible ya que Plan Rombo procederá a la liquidación del mismo determinando, según los fondos disponibles, el porcentaje que en concepto de Haber de Cuotas Puras podrá distribuirse entre los suscriptores en condición de renunciados o rescindidos.

El haber de cuotas calculado según lo indicado, le será reintegrado mediante acreditación en su cuenta bancaria (caja de ahorro o cuenta corriente) en razón de la seguridad, practicidad y demás ventajas de ese medio de pago. Para lo cual requerimos que nos informe su CBU, cuya titularidad deberá coincidir con los datos del titular del contrato

Al día siguiente recibe la misma información, pero por carta documento N° 292668828 del correo argentino, “Buenos Aires, 08 de Mayo de 2024 REFERENCIA: CONTRATO G7UH020-H Nos dirigimos a Ud. con el objeto de comunicarle que ha resultado ganador en el Acto de Adjudicación del mes de Mayo 2024.

A fin de formalizar la aceptación de la adjudicación, Ud. deberá concurrir a su Concesionario Renault a los efectos de realizar el pedido de la unidad, previo pago, de las sumas que adeudara por cuotas, Cuota Extraordinaria en caso de corresponder y/o conceptos vencidos impagos, como así también del cambio de modelo si fuera solicitado.

De no ingresar en Plan Rombo antes del 28/05/2024 la aceptación de adjudicación y el pedido de la unidad de su elección asumiremos que Ud. renuncia al plan y no desea retirar el vehículo, por lo que procederemos a anular la adjudicación en forma definitiva.

Habiendo finalizado la vigencia del grupo que integra, la anulación de la adjudicación será irreversible ya que Plan Rombo procederá a la liquidación del mismo determinando, según los fondos disponibles, el porcentaje que en concepto de Haber de Cuotas Puras podrá distribuirse entre los suscriptores en condición de renunciados o rescindidos.

El haber de cuotas calculado según lo indicado, le será reintegrado mediante acreditación en su cuenta bancaria (caja de ahorro o cuenta corriente) en razón de la seguridad, practicidad y demás ventajas de ese medio de pago. Para lo cual requerimos que nos informe su CBU, cuya titularidad deberá coincidir con los datos del titular del contrato.

Para declarar esta información, deberá ingresar en www.planrombo.com.ar, sección MI PLAN ROMBO y acceder con su DNI/CUIT y clave, o registrarse, en el caso de que todavía no lo haya hecho. Luego seleccionar "Mi Cuenta" / "Declaración de CBU". Aquí, deberá completar los campos "CBU" y "CUIT/CUIL". Finalmente, al presionar "CONFIRMAR", los datos quedarán grabados. • Queda Ud. debidamente notificado.

La actora siguiendo la instrucciones vuelve al concesionario en el cual nuevamente le informan que para seguir adelante con el proceso de adjudicación debía abonar la suma anteriormente indicada de de \$5.055.429,54 (pesos cinco millones cincuenta y cinco mil cuatrocientos veintinueve con 54/00) en concepto de *diferimiento de pago de medida cautelar* promovida por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Tucumán, DEFENSOR DEL PUEBLO DE TUCUMAN c/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS s/ SUMARISIMO (RESIDUAL) 2702/19. De lo contrario no procederían adelante con el proceso de adjudicación. Ante esta situación y la inminente culminación del grupo al que pertenece la actora, y evitar la pérdida del derecho de adjudicación, remite una carta documento en fecha 22 de mayo de 2024 **en la informa la aceptación e íntima a la entrega inmediata de la unidad. Siendo que restaba solo el mes de junio, antes de la liquidación del plan y la entrega de fondos.**

Cattólica Joana Elizabeth, DNI 36838287. En contestación a la carta documento enviada por Ud. Y recepcionada en fecha 13/05/2024 (N.º 29266882B) y en mi condición de suscriptor del Plan de Ahorros para Fines Determinados contrato G7UH020-H, Nro. de cliente 2070619020, habiendo mi parte cancelado la totalidad de las cuotas previstas contractualmente, INTIMO a la inmediata entrega del vehículo. Asimismo, INTIMO por la presente a que se ABSTENGA DE PRETENDER COBRAR O UTILIZAR CUALQUIER MEDIO DE COACCIÓN, COERCIÓN O APREMIO PARA DICHOS FINES, por sí o a través de cualquier persona que invoque su representación, las supuestas diferencias que surgen por aplicación de la medida cautelar ordenada en el juicio Defensor del pueblo de Tucumán vs Volkswagen SA de Ahorro para Fines Determinados y otros s/Sumarísimo, Expte 2702/19. Dicha conducta de vuestra parte resulta ilegítima, improcedente, maliciosa, contraria a derecho y violatoria del art. 8 bis de la Ley 24.240, toda vez que la cautelar se encuentra en plena vigencia, revistiendo por ende los montos que se pretenden cobrar (diferencias) el carácter de no exigibles, supeditados y condicionados al resultado final del juicio arriba citado. En caso de negativa y/o silencio INICIARÉ SIN MÁS TRÁMITES LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES en resguardo de mis legítimos derechos. QUEDA UD DEBIDAMENTE NOTIFICADO. San Miguel de Tucumán, 22 de Mayo de 2024.

Habiendo manifestado por un medio fehaciente la actora, su aceptación a la adjudicación de la unidad. La actora se manejó cumpliendo lo requerido y lo establecido en el contrato de adhesión cláusula 8 ADJUDICACIONES, *El Adjudicatario que hubiere resultado favorecido en el Sorteo, deberá aceptar expresamente la Adjudicación del Automotor dentro de los quince (15) días hábiles de notificado, caso contrario, la Adjudicación podrá ser anulada por PLAN ROMBO. Si el Adjudicatario no aceptare la Adjudicación efectuada, ésta se repetirá en el Acto de Adjudicación del próximo mes, conforme con lo indicado en el apartado a) de esta Cláusula 8. En los planes de 72, 84 y 120 meses, si a la fecha del Acto de Adjudicación, el Suscriptor adjudicado por Sorteo no hubiere abonado la cantidad de cuotas previstas como integración mínima en la Cláusula 1 de este Capítulo, deberá cumplir con este requisito antes del retiro del automotor, aplicándose lo dispuesto en la Cláusula 18 del Capítulo I, caso contrario, ésta quedará anulada, procediendo PLAN ROMBO a ofrecerla en el acto de adjudicación inmediato siguiente al de la fecha de anulación.*

Asimismo, surge de la cláusula 9 obligaciones del adjudicatario, sobre lo que debe abonar o cumplir OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO: El Suscriptor Adjudicatario entrará en posesión de su correspondiente Automotor, el que le será facturado y entregado por el Fabricante o Representante del Fabricante Exportador que figura designado en estas Condiciones Generales o por el Concesionario Oficial o Agente Oficial del Fabricante o Representante del Fabricante Exportador, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

- *Abonar el Derecho de Adjudicación.*
- *Abonar todo gravamen, patente y/o gasto que establezcan las disposiciones vigentes con relación a la compra del automotor, que no se encuentren incluidos en el valor de las cuotas. El pago de patentes y otros gravámenes que pudieran existir, deberán efectuarse estrictamente dentro de los plazos legales, pudiendo PLAN ROMBO exigir en cualquier momento la exhibición de los respectivos comprobantes.*
- *Suscribir por el total de las Cuotas a vencer, un contrato de Prenda con Registro en primer grado (Decreto Ley 15.348/46 ratificado por la Ley 12.962 y ampliadas sus disposiciones por la Ley 21.309) con Cuota reajutable, a favor de PLAN ROMBO y abonar sellados, derechos, tasas, gastos y honorarios de gestoría que origine la inscripción, en el caso de no hallarse incluidos en el valor de las cuotas.*

Tengamos en cuenta que la señora Cattolica al suscribir su plan eligió optar por abonar el 100% y llevaba abonada hasta la cuota 83 por lo restaba solo una previo a la finalización del plan. Se adjunta la totalidad de las cuotas abonadas por la actora. De lo que se colige que la actora que resultó adjudicada solamente debía abonar • *Abonar el Derecho de Adjudicación.* • *Abonar todo gravamen, patente y/o gasto que establezcan las disposiciones vigentes con relación a la compra del automotor, que no se encuentren incluidos en el valor de las cuotas. El pago de patentes y otros gravámenes que pudieran existir, deberán efectuarse estrictamente dentro de los plazos legales, pudiendo PLAN ROMBO exigir en cualquier momento la exhibición de los respectivos comprobantes.*

No así el monto de la cautelar del defensor del pueblo, lo cual no está previsto, siendo así podemos decir que PLAN ROMBO INCUMPLIO las cláusulas del contrato de adhesión por que hizo caso omiso a la comunicación de la actora.

05 JUN. 2024 BUENOS AIRES, REF: CONTRATO G7UH020-H
Clave de Identificación: 2070619020 De nuestra consideración: Nos dirigimos a Ud. en respuesta a su carta documento + 4059892-2, a efectos de informarle que, de acuerdo a lo comunicado en nuestra carta documento CD292668828, al no ingresar la aceptación de adjudicación y el pedido de la unidad dentro de los plazos establecidos, se procedió a anular la adjudicación en forma definitiva.

Habiendo finalizado la vigencia del grupo que integra, Plan Rombo procederá a la liquidación del mismo determinando, según los fondos disponibles, el porcentaje que en concepto de Haber de Cuotas Puras podrá distribuirse entre los suscriptores en condición de renunciados o rescindidos. Por lo expuesto, para efectivizar el reintegro en tiempo y forma de los Haberes Netos, Plan Rombo S.A. ha instrumentado el mismo mediante acreditación en su cuenta bancaria (caja de ahorro o cuenta corriente) en razón de la seguridad, practicidad y demás ventajas de ese medio de pago.

Para lo cual requerimos que nos informe su CBU, cuya titularidad deberá coincidir con los datos del titular del contrato. Para declarar esta información, deberá ingresar en www.planrombo.com.ar, sección MI PLAN ROMBO y acceder con su DNI/CUIT y

clave, o registrarse, en el caso de que todavía no lo haya hecho. Luego seleccionar "Mi Cuenta" / "Declaración de CBU". Aquí, deberá completar los campos "CBU" y "CUIT/CUIL". Finalmente, al presionar "CONFIRMAR", los datos quedarán grabados. Ante cualquier duda puede comunicarse a nuestro Centro de Atención Telefónico al 0800- 222-3570 de Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.

La decisión de liquidar el grupo a pesar de que “acepto” la adjudicación por un medio fehaciente causa un gravamen irreparable, siendo que genera haber pagado todas las cuotas y que confiscatoriamente desnaturalizando el fin del contrato del PLAN AHORRO y violando el mandato conferido a la administradora del plan de ahorros en este caso plan rombo.

A los efectos de en un acto de cumplimiento de obrar de buena fe y lealtad que debía obrar plan rombo la actora, vuelve a enviar una carta documento. En fecha 10 de junio de 2024, *Por la presente rechazo por improcedente y maliciosa su carta documento N° de fecha 05 de junio de 2024 en la que proceden a dejar sin efecto el cacto de adjudicación de mayo por el cual fui sorteada, como ganadora del mes. Como respuestas a sus requerimientos de pedido de unidad, lo hice fehacientemente mediante la carta documento enviada a Uds. En fecha 24 de mayo de 2024 en la expresamente pido la puesta a disposición y aceptación del vehículo. Siendo que una vez que me apersone al concesionario oficial Renault. Me informaron que debía abonar excesivos gastos, condiciones que eran ajenas al contrato, como a la entrega del vehículo, lo cual atenta al Art. 4 y 8bis de la Ley 24240. - Por su respuesta me están negando un derecho adquirido, causando un daño totalmente irreparable, que demandara la concurrencia a los tribunales en aras de defender mis derechos de propiedad, la no entrega del vehículo, como la puesta disposición de los fondos, en concepto de cuota puras pese al haber manifestado mi voluntad de tener mi vehículo causa un daño por su exclusiva culpa. Manifiesto enfáticamente que no renuncie, ni quiero que pongan a disposición la cuota pura porque atenta el fin que tuve al contratar que fue adquirir mi vehículo. Por lo expuesto intimo a que el plazo de 48 hs de recibida la misma ponga a mi disposición el automóvil que fui sorteada legítimamente. Bajo apercibimiento de iniciar las acciones de consumo por daños y perjuicios. –*

Pese a la flagrante violación a la ley 24240 y sus modificatoria, como así de todas las resoluciones de la IGJ en relación al pago de deudas. Enviaron una carta documento de fecha 10 de julio de 2024 en la proceden a liquidar el grupo y poner s disposición fondos totalmente exiguos, y sin justificación o calculo alguno en el cual el perjuicio consumado es irreparable más que acudir a la justicia.

La situación de discriminación y falta de trato digno a los ahorristas de la provincia de Tucumán se viene pergeñando desde que el defensor del pueblo solicito una medida cautelar en una supuesta protección de sus derechos , es necesario introducir en que consiste la deuda que pretendió cobrar PLAN ROMBO SA DE AHORROS PARA FINES DETERMINADOS a la actora la es violatoria de la resolución 14/20 de la IGJ y la de sentencia de Cámara civil y comercial Sala III sobre el modo de cobro.

a partir del mes de mayo de 2018.como consecuencia de la súbita e impredecible devaluación de la moneda, los precios de lista sufrieron aumentos de manera considerables, Es lógico que, de los importes pagados sobre todo desde el mes de mayo de 2018 a la fecha, donde se evidencia que las cuotas no tienen equivalencia alguna con los índices de inflación del INDEC, ni siquiera con el aumento del dólar estadounidense, razón por la cual, siendo de conocimiento publico que el valor de las cuotas mensuales depende de la voluntad unilateral e inconsulta de los proveedores [sociedad administradora en colusión con la fábrica automotriz] y ***sin claridad alguna sobre los cálculos matemáticos que han llevado a este crecimiento desmedido en el valor de la cuota, generando un desequilibrio en la economía del ahorrista y de todos aquellos que se encuentran sometidos a los planes de ahorro, a raíz de ello se produjo un aumento descabellado, irracional y desmedido sin limitación alguna en el precio de lista del bien tipo.***

Situación que motivo que en 2019 se dictara una Ley 27541, LEY DE SOLIDARIDAD SOCIAL Y REACTIVACIÓN PRODUCTIVA EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA PÚBLICA, Artículo 1º- *Declárase la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y deléganse en el Poder Ejecutivo nacional, las facultades comprendidas en la presente ley en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, con arreglo a las bases de delegación establecidas en el artículo 2º, hasta el 31 de diciembre de 2020.* ólo genéricamente, el art. 60 de la ley de emergencia N° 27.541 titulado "Créditos UVA" dispuso en relación al tema que nos convoca "El Banco Central de la República Argentina) *realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA para la adquisición de viviendas y los sistemas de planes de ahorro para la adquisición de vehículos automotor, sus consecuencias sociales y económicas, y estudiará mecanismos para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor", pero dicha norma fue publicada en el Boletín Oficial el 23/12/2019, es decir, tres meses antes de la imposición del aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por el DNU 297/2020.*

Esos aumentos impactaron de lleno en el valor móvil a pagar, tornando cada vez más difícil para los ahorristas pagar en tiempo y forma, con la gravedad del peligro cierto de perder los vehículos si fueran ejecutadas las prendas que gravan las unidades, sobre todo desde ***que ceso la suspensión de iniciar ejecuciones prendarias dispuestas por el art. 7 inciso 1º de la Resolución N° 14/2020 y las sucesivas Resoluciones modificatorias (vgr. Res. N° 38/2020 y 51/2020 IGJ)***

Esta situación motivo a que el defensor del pueblo de la provincia de Tucumán, interponga una medida cautelar en el año 2019, en contra de los aumentos desmedidos autos: ***DEFENSOR DEL PUEBLO DE TUCUMAN c/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS s/ SUMARISIMO (RESIDUAL) 2702/19. Como antecedentes sostiene “4/9 el Defensor del Pueblo de Tucumán interpone acción colectiva de consumo en contra de las empresas 1) VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES***

DETERMINADOS, 2) F.C.A. S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 3) PLAN OVALO DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 4) PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 5) CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 6) INTERPLAN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 7) TOYOTA PLAN ARGENTINA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 8) AUTOPLAN DE INVERSORES S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, y 9) CIRCULO DE INVERSORES SAU DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS. Solicitando medida cautelar al fin de evitar el daño inminente e irreparable a los consumidores de planes de ahorro de la Provincia de Tucumán, en atención a los excesivos aumentos, como considerando la Juez de Grado tomo como antecedentes, Por otro lado, tengo presente que por resolución nro. 2/2019 de la Inspección General de Justicia de la Nación se resolvió lo siguiente: "ARTÍCULO 1°.- Las entidades administradoras de planes de ahorro bajo la modalidad de "grupos cerrados", deberán ofrecer a los suscriptores ahorristas y adjudicatarios que no registren una mora superior a tres cuotas a la fecha de la vigencia de la presente resolución, el diferimiento del pago de un porcentaje no inferior al veinte por ciento (20%) de las cuota partes a emitir por las entidades administradoras. Dicho diferimiento será ofrecido a los suscriptores desde la entrada en vigencia de la presente resolución y hasta el 31 de diciembre de 2019. El diferimiento se aplicará como mínimo durante cinco meses desde la aceptación por parte del suscriptor. ARTÍCULO 2°.- El diferimiento a ofrecer deberá preservar y garantizar el cumplimiento del objeto de los planes de ahorro para fines determinados. ARTÍCULO 3°.- El diferimiento será aplicable a los planes de ahorro que se hubieren agrupado hasta el 31 de Agosto de 2019. ARTÍCULO 4°.- Los talones de pago discriminarán el monto total de la cuota parte y el que corresponda deducido el porcentaje diferido, precisándose el porcentaje del valor del bien-tipo que quedará cancelado con ese pago parcial. Los suscriptores conservarán siempre la facultad de abonar el total al vencimiento de la cuota parte. Las ofertas de licitación y cancelaciones anticipadas deberán efectuarse conforme el valor del bien-tipo a la fecha de pago. ARTÍCULO 5°.- Las cargas administrativas serán calculadas sobre el monto efectivamente pagado conforme el diferimiento otorgado. ARTÍCULO 6°.- El recupero del diferimiento a otorgar, se realizará en las cuotas inmediatamente consecutivas a los meses del diferimiento y en un plazo no inferior a doce meses. En caso de que el suscriptor adherido al presente diferimiento resulte adjudicado, el mismo deberá cancelar en su totalidad lo diferido pendiente de recupero hasta el momento, como requisito para la entrega de la unidad. ARTÍCULO 7°.- El ofrecimiento del diferimiento será opcional de las administradoras respecto a los suscriptores que sean parte de procesos judiciales. ARTÍCULO 8°.- El diferimiento se ofrecerá a los suscriptores cuyos planes tengan un plazo de duración igual o mayor a la sumatoria de los períodos de diferimiento y recupero, a partir de la vigencia de la presente resolución. ARTÍCULO 9°.- A partir de la vigencia de la presente resolución y hasta el 30 de junio de 2020, las administradoras suspenderán el cobro de los intereses punitivos pactados contractualmente como sanción por los pagos realizados fuera de término, a los suscriptores morosos".

Por lo expresado, considero prudente hacer lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por la parte actora. En consecuencia, previa caución juratoria, ordenar que los demandados realicen una suspensión de pago del 20%, de las alícuotas devengadas desde la fecha de demanda, únicamente a los adherentes y adjudicatarios de planes de ahorro que tengan domicilio real en la jurisdicción del Centro Judicial Capital, conforme a los parámetros establecidos en la resolución nro. 2/2019 de la Inspección General de Justicia de la Nación, con la excepción que la postergación de pago y demás ítems establecidos en la misma, tendrán vigencia durante la tramitación de este juicio, absteniéndose asimismo los accionados de iniciar proceso legal alguno dentro del plazo estipulado, y de cobrar intereses de cualquier tipo. Por otro lado, el incremento de la alícuota no podrá superar anualmente el índice de inflación acumulada, publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Oportunamente, disponer la publicación de la parte resolutive en un diario de mayor difusión en la provincia . RESUELVE. HACER LUGAR PARCIALMENTE a la medida cautelar solicitada por la parte actora. En consecuencia, previa caución juratoria ordenar que: 1) VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 2) F.C.A. S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 3) PLANOVALO DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 4) PLAN ROMBO S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 5) CHEVROLET S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 6) INTERPLAN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 7) TOYOTA PLAN ARGENTINA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, 8) AUTOPLAN DE INVERSORES S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, y 9) CIRCULO DE INVERSORES SAU DE AHORRO PARA FINES

DETERMINADOS, realicen una suspensión de pago del 20%, de las alícuotas devengadas desde la fecha de demanda, únicamente a los adherentes y adjudicatarios de planes de ahorro con domicilio real en la jurisdicción del Centro Judicial Capital, de la Provincia de Tucumán, conforme a los parámetros establecidos en la resolución nro. 2/2019 de la Inspección General de Justicia de la Nación, con la excepción que la postergación de pago y demás ítems establecidos en la misma, tendrán vigencia durante la tramitación de este proceso, absteniéndose asimismo los accionados de iniciar proceso legal alguno dentro del plazo estipulado, y de cobrar intereses de cualquier tipo. Por otro lado, el incremento de la alícuota no podrá superar anualmente el índice de inflación acumulada, publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Oportunamente, disponer la publicación de la parte resolutive en un diario de mayor difusión de la provincia. En fecha 04/09/2019.

En el marco del mismo proceso, la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común Sala III en fecha 14 de noviembre de 2019, considero de la documentación aportada -que se analiza al solo efecto de la presente pretensión cautelar- advertimos que en los distintos planes de ahorros, que para estos efectos sirven como “casos testigos”, el valor de las respectivas alícuotas comenzó a incrementarse sensiblemente a partir de los meses de mayo, junio y julio de 2018 y en adelante, sin que las agencias, concesionarias y compañías financieras hayan notificado a cada suscriptor los motivos o razones de tal proceder, aunque es obvio que ello obedeció al cuadro de la economía nacional arriba descrito, en donde,

como parámetro esencial, según lo informa la página oficial del INDEC, la inflación acumulada para todo el 2018 hasta enero de 2019 fue del 49,3% (www.indec.gob.ar). Dicha circunstancia, justifica en este caso concreto que, aún a riesgo introducir un factor que pudiera llegar a alterar el equilibrio de la lógica de los distintos planes de ahorro, que arriba fue explicada, en atención a las circunstancias señaladas, se admitan los agravios del apelante. En consecuencia se modifica parcialmente la sentencia recurrida extendiendo retroactivamente los efectos de la medida cautelar allí otorgada a partir del 1° de mayo de 2018. **RESUELVE: HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a en subsidio del recurso de revocatoria a fs. 139/140 por el letrado apoderado de la parte actora Sr. Defensor del Pueblo de Tucumán y en consecuencia DISPONER que la medida cautelar otorgada por sentencia del 04/09/19 de fs. 134/136 será de aplicación a partir del mes de abril de 2018 y que será aplicable a los adherentes y adjudicatarios de planes de ahorro con domicilio real en cualquier lugar de la provincia. HÁGASE SABER.**

Esta situación género que cada ahorrista o usuario de la provincia de Tucumán debía tener en su boleta un descuentos de pago del 20%, de las alícuotas conforme a los parámetros establecidos en la resolución nro. 2/2019 de la Inspección General de Justicia de la Nación, con la excepción que la postergación de pago y demás ítems establecidos en la misma, tendrán vigencia durante la tramitación de este proceso, absteniéndose asimismo los accionados de iniciar proceso legal alguno dentro del plazo estipulado, y de cobrar intereses de cualquier tipo

Situación que resulta clara e inequívoca, 20% de la alícuota sin aplicación de intereses durante la tramitación del proceso.

Esta medida cautelar fuere apelada por el defensor del pueblo que había solicitado su ampliación solicitado situación en fecha 10 de marzo de 2020, la Excma. Cámara Civil y Comercial Sala III, autos: **DEFENSOR DEL PUEBLO DE TUCUMAN C/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS S/ SUMARISIMO (RESIDUAL) 2702/19-II** considero **RESUELVE: HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto a fs. 31 por el letrado apoderado de la parte actora Sr. Defensor del Pueblo de Tucumán y REVOCAR la resolución de fecha 26 de diciembre de 2019 (fs.29/30) y en consecuencia DISPONER ampliar la medida cautelar de fecha 04/09/2019 (fs.14/17) y ORDENAR LA SUSPENSION de los procesos ejecutivos iniciados por las demandadas en autos, en contra de adherentes y adjudicatarias de planes de ahorro para la compra de vehículos y con domicilio real en cualquier lugar de la provincia, la cual tendrá vigencia durante la tramitación de este proceso. A tal fin ofíciase a los Juzgados Civiles en Documentos y Locaciones del Centro Judicial Capital, Centro Concepción y Monteros, para que tomen razón de la presente resolución en cada uno de los juicios y procedan a informar la nómina de juicios comprendidos.**

Estas sentencias generaron que las administradoras de los planes de ahorros alcanzadas por las sentencias interpusieran recursos de apelaciones conforme se puede observar en los autos ““DEFENSOR DEL PUEBLO DE TUCUMAN c/ VOLKSWAGEN

S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS s/ SUMARISIMO (RESIDUAL)" - Expte. N° 2702/19-I2, en fecha 12 de marzo de 2021 en la que se observa que las accionadas las codemandadas FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados (fs. 21/22), Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados (fs. 24), Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados (fs. 49/50), Círculo de Inversores S.A. de Ahorro para Fines Determinados S.A. (fs. 52), Renault Argentina y Plan Rombo S.A. de Ahorro para Fines Determinados (fs. 87), y los recursos de apelación deducidos en subsidio de revocatoria por las codemandadas Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados (fs.26/47) y Toyota Plan Argentina S.A. de Ahorro para Fines Determinados (fs. 60/85) contralas sentencias de fecha 04 de septiembre de 2019 y 14 de noviembre de 2019 en virtud de lascuales se resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la actora.

A lo expuesto cabe añadir que los suscriptores de planes de ahorro cerrados para la adquisición de automotores en modo alguno pueden calificarse como un “colectivo tradicionalmente postergado o débilmente protegido”. En lo que concretamente refiere a la cuestión que es materia de la demanda deducida en autos, la situación fue objeto de previsión expresa en el artículo 60 de la Ley N° 27541 que específicamente asignó al Banco Central de la República Argentina la misión de realizar una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias de los sistemas de planes de ahorro para la adquisición de vehículos automotor, sus consecuencias sociales y económicas, y de estudiar mecanismos para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor; a resultas de lo cual la Inspección General de Justicia emitió su Resolución N° 14/2020 ocupándose del tema, tal como lo había hecho antes con la Resolución N° 2/2019.

Cabe aquí aclarar que esta consideración en modo alguno implica sostener que tales decisiones regulatorias sean vinculantes para el Poder Judicial o que las soluciones en ellas plasmadas subsanen eventuales lesiones a los derechos de los consumidores; lo que se afirma es que tales medidas descartan de plano la posibilidad de sostener que la tutela colectiva planteada procedería en el caso por la débil protección del colectivo involucrado.

Por todo ello, corresponde hacer lugar a los recursos de apelación directa interpuestos por los administradores. en contra de las sentencias de fecha 04 de septiembre de 2019 y 14 de noviembre de 2019, y disponer el inmediato levantamiento de la medida cautelar apelada, declarando la falta de legitimación activa del Defensor.

10.- Resta, por último, ocuparse del modo en que los suscriptores beneficiados por los efectos de la cautelar que ha sido levantada habrán de cumplimentar los pagos correspondientes a los porcentajes de cuotas que fueron materia de diferimiento. Al respecto, el Tribunal considera que resultaría manifiestamente inequitativo imponer a los consumidores que las sumas cauteladas fueran exigibles en su totalidad en forma inmediata, pues ello implicaría ocasionar un perjuicio grave a sus intereses y derechos, agravando la situación existente con anterioridad a la acción promovida por la Defensoría del Pueblo de Tucumán.

A tales efectos, se considera razonable aplicar el criterio establecido en el artículo 5 de la Resolución N° 14/2020 (Inspección General de Justicia), con las modificaciones que aquí se establecen en razón del lapso durante el cual estuvo vigente la medida cautelar dejada sin efectos.

En consecuencia, se dispone que el recupero de los montos correspondientes a los porcentajes de cuotas diferidos por efecto de la medida cautelar ordenada en autos operará mediante el pago, a opción del consumidor, de hasta un máximo de veinticuatro (24) cuotas una vez finalizado el plan de ahorro, las que tendrán el carácter de cuotas suplementarias. El monto de ninguna de ellas podrá exceder el de una (1) cuota (alícuota más carga administrativa), de manera tal que en caso de ser necesario el número de cuotas aumentará correlativamente.

Finalmente, aunque resulta una obviedad, se aclara que las sumas diferidas por efecto de la cautelar no se encuentran en mora y, en consecuencia, no corresponde a su respecto la resolución del contrato por incumplimiento, el inicio de acciones judiciales de cobro y la información a las bases de datos de informaciones comerciales.

RESUELVE:

I.- HACER LUGAR a los recursos de apelación interpuestos por FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados (fs. 21/22), Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados (fs. 24), Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados (fs. 49/50), Círculo de Inversores S.A. de Ahorro para Fines Determinados S.A. (fs. 52), Renault Argentina y Plan Rombo S.A. de Ahorro para Fines Determinados (fs. 87), y los recursos de apelación deducidos en subsidio de revocatoria por las codemandadas Plan Ovalo S.A. de Ahorro para Fines Determinados (fs. 26/47) y Toyota Plan Argentina S.A. de Ahorro para Fines Determinados (fs. 60/85), en contra de las sentencias de fecha 04 de septiembre de 2019 y 14 de noviembre de 2019, y disponer el inmediato levantamiento de las medida cautelar apelada, declarando la falta de legitimación activa del Defensor del Pueblo de Tucumán y ordenando el correlativo rechazo de la acción entablada.

II.- DISPONER que el recupero de los montos correspondientes a los porcentajes de cuotas diferidos por efecto de la medida cautelar ordenada en autos operará mediante el pago, a opción del consumidor, de hasta un máximo de veinticuatro (24) cuotas una vez finalizado el plan de ahorro, las que tendrán el carácter de cuotas suplementarias. El monto de ninguna de ellas podrá exceder el de una (1) cuota (alícuota más carga administrativa), de manera tal que en caso de ser necesario el número de cuotas aumentará correlativamente.

Ante esta sentencia el defensor del pueblo presento un recurso de aclaratoria en el cual pide En el primero (22/03/21) solicita que se incluya en la parte dispositiva de la sentencia lo señalado en sus considerandos en el sentido que las sumas cuyo pago había sido diferido por efecto de la medida cautelar dispuesta no estaban en mora, ni debía entenderse que ello daría lugar a demandas por resolución de contrato por incumplimiento, acciones judiciales de cobro o información a bases de datos de informaciones comerciales.

legitimación del Sr. Defensor del Pueblo para actuar en este tipo de acciones y ordenando la readecuación de las sumas no pagadas por los ahorristas en un plazo de hasta 24 meses (o más en ciertos casos puntuales), corresponde señalar que por la magnitud de los intereses involucrados, en la medida en que no se aparten del cauce procesal actual, ni que sean divergentes con la decisoria que ha sido adoptada por el Tribunal, la resolución del 12/03/21 será complementada en los términos del art. 269 CPCC. con las siguientes consideraciones:

*a.- Explicitando en la parte resolutive del presente fallo que las sumas oportunamente diferidas por efecto de la cautelar no se encuentran en mora, por lo que no corresponde a su respecto la resolución del contrato por incumplimiento, el inicio de acciones judiciales de cobro y la información a las bases de datos de informaciones comerciales, tal como fue considerado en la resolución cuya aclaratoria se solicita; **RESUELVE:I.- HACER LUGAR** parcialmente a las aclaratorias interpuestas por la parte actora. En consecuencia: **a.- ACLARAR** la parte resolutive de la sentencia del 12/03/21 en el sentido que las sumas oportunamente diferidas por efecto de la cautelar no se encuentran en mora, por lo que no corresponde a su respecto la resolución del contrato por incumplimiento, el inicio de acciones judiciales de cobro y la información a las bases de datos de informaciones comerciales.*

*Explicado esto el defensor del pueblo recurre a la Excma. Corte suprema siendo que en fecha 14/06/22 ,**R E S U E L V E :I.- NO HACER LUGAR** al recurso de casación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Común, de fecha 12/03/21 en mérito a lo considerado.*

Ante esta situación interpone el defensor del pueblo recurso extraordinario federal, el cual es receptado y se encuentra en trámite pendiente de resolución.

Realizada esta necesaria introducción, sobre la situación de los ahorristas de la provincia de Tucumán, se presentó una situación conflictiva que afecta de manera económica y genera un gran perjuicio a todos los adherentes de la provincia centrados precisamente en el caso de la actora JOANA ELIZABETH CATTOLICA que abono todas sus cuotas y resulto adjudicataria por sorteo sin embargo se negó su derecho por la exigencia de la cautelar.

Llama poderosamente la atención el monto que exigen, **ya que no está registrado en las boletas de pago** “descuento o aplicación de cautelar” incurriendo en no solo en el deber información consagrado en el Art. 4 de la Ley 24240 sino también el art. 36 en el cual el proveedor en este caso PLAN ROMBO no determino en las boletas de pago que se adjuntan la supuesta aplicación de la cautelar o diferimiento alguno, sin embargo de manera aleatoria sostienen que debe \$5.055.489, pesos. Siendo que el valor móvil del logan life 1.6 en la actualidad es de \$22.000.000, solicitando que abone casi el 25% del valor del vehículo estando abonadas todas las cuotas.

Asimismo no se ofreció un diferimiento de cuotas, previsto La Excm. Cámara sala III fijó un criterio que ante una situación sobreviniente de estas características debía aplicarse lo fijado en la resolución general 14/2020 de la Inspección General de Justicia. Pero de la siguiente manera “*A tales efectos, se considera razonable aplicar el criterio establecido en el artículo 5 de la Resolución N° 14/2020 (Inspección General de Justicia), con las modificaciones que aquí se establecen en razón del lapso durante el cual estuvo vigente la medida cautelar dejada sin efectos con las modificaciones que aquí se establecen en razón del lapso durante el cual estuvo vigente la medida cautelar dejada sin efectos.*”

En consecuencia, se dispone que el recupero de los montos correspondientes a los porcentajes de cuotas diferidos por efecto de la medida cautelar ordenada en autos operará mediante el pago, a opción del consumidor, de hasta un máximo de veinticuatro (24) cuotas una vez finalizado el plan de ahorro, las que tendrán el carácter de cuotas suplementarias. El monto de ninguna de ellas podrá exceder el de una (1) cuota (alícuota más carga administrativa), de manera tal que en caso de ser necesario el número de cuotas aumentará correlativamente.

Finalmente, aunque resulta una obviedad, se aclara que las sumas diferidas por efecto de la cautelar no se encuentran en mora y, en consecuencia, no corresponde a su respecto la resolución del contrato por incumplimiento, el inicio de acciones judiciales de cobro y la información a las bases de datos de informaciones comerciales.

La resolución 14/20 de la IGJ Ciudad de Buenos Aires, 10/04/2020 VISTO: El dictado de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública y la situación de los planes de ahorro para fines determinados bajo la modalidad de “círculos cerrados” para la adjudicación directa de automotores; y CONSIDERANDO: Que en la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social declarada por la Ley N° 27.541 se halla comprendida la situación de los planes de ahorro previo bajo la modalidad de “grupos cerrados” habida cuenta del fuerte incremento –del orden de no menos de un 200% promedio- que a partir y como impacto de la devaluación producida en el año 2018 y la subsiguiente después de agosto de 2019, se registró en el precio de los automotores cuya adjudicación directa constituye el objeto de dichos planes, lo cual, por la funcionalidad propia del sistema, ha sido determinante de un fuerte incremento de las cuotas de ahorro y de amortización que las sociedades administradores liquidan y que deben pagar los suscriptores como medio de consecución de los bienes, y que ha determinado a su vez crecientes dificultades de aquellos para afrontar los pagos, lo que pone en crisis al sistema como medio de acceso masivo a bienes de consumo durable como los automotores.

Que el art. 60 de la ley mencionada ha puesto a cargo del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA evaluar tal situación y estudiar mecanismos para mitigar sus efectos negativos. Que en reuniones con participación de los diversos sectores involucrados ha sido discutida la problemática y que sin perjuicio de la manda legal al BANCO CENTRAL

DE LA REPUBLICA ARGENTINA los mecanismos de respuesta a la emergencia que han sido evaluados, deben ser plasmados en la presente resolución de esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, habida cuenta de las atribuciones reglamentarias de contenido material de este organismo, otorgadas por los arts. 174 de la Ley N° 11.672 (t.o. 2014) y 9° inc. f) de la Ley N° 22.315.

Que en las críticas circunstancias de la economía nacional y considerando la pérdida de poder adquisitivo de vastos sectores de la población dentro de los que se encuentran los suscriptores de planes de ahorro por “círculos cerrados” y las actuales condiciones de financiamiento de los mismos expresadas por el sector automotriz, es necesaria para favorecer la preservación del sistema –en tanto instrumento social y económicamente útil para acceder a bienes de consumo durable- la adopción de medidas que resguarden la capacidad de pago de los suscriptores en tanto ello puede ser apto para aumentar las probabilidades de recaudar en los grupos de suscriptores los fondos necesarios para la adjudicación de los bienes.

Que es dable esperar que las medidas que por la presente se adoptan, sean igualmente adecuadas para hacer posible que los suscriptores que ya hayan recibido el bien-tipo, puedan cumplir con sus obligaciones en condiciones que les permitan conservarlo. Que cabe entonces establecer un régimen de diferimiento del pago de determinado porcentual de la cuota de ahorro y/o de amortización según el caso, cuya aplicación contribuya a la continuidad de los contratos.

Que dicho régimen debe implementarse con respecto a la cartera contractual integrada por contratos individuales agrupados en función de su bien-tipo con anterioridad al 30 de septiembre de 2019, dado que la capacidad de pago de los suscriptores se había agravado con anterioridad a esa fecha como consecuencia del impacto de las devaluaciones de ese año y del anterior, no así con respecto a contratos posteriores respecto de los cuales las posibles dificultades de cumplimiento ya eran a esa altura de conocimiento de los interesados y podían ser evaluadas por éstos en orden a decidir o no su concertación. Que para que el diferimiento se traduzca también en una disminución del precio del bien-tipo, es necesario prever el beneficio de la bonificación de un determinado porcentaje de la parte de la cuota cuyo pago se difiera, en favor de aquellos suscriptores que participen en planes cuyo objeto sean los modelos –o sustitutos de ellos- de vehículos de menor gama o utilitarios a ser identificados en Anexo a la presente, siempre que tales suscriptores satisfagan determinadas condiciones resumidas en un buen cumplimiento de sus obligaciones conforme se lo interpreta en esta resolución a través de los requisitos previstos al efecto.

Que del lado de las entidades administradoras el diferimiento parcial del pago de cuotas en la forma reglamentada en esta resolución, debe ser de ofrecimiento obligatorio tanto a los suscriptores que se hallaren en período de ahorro como a los que ya hubieren obtenido la adjudicación del bien-tipo.

Que es igualmente conducente a la continuidad de la operatoria que las sociedades administradoras que provean mecanismos que bajo determinadas condiciones posibiliten reactivar contratos extinguidos con anterioridad para que los suscriptores de los mismos recuperen la posibilidad de acceder al bien-tipo, en cuanto el mejoramiento de la capacidad de pago de los suscriptores que en lo inmediato acarrearía el diferimiento parcial en el pago de cuotas podría alentar esa rehabilitación contractual; ello sin perjuicio de que el haber de reintegro de aquellos suscriptores que no se acojan a tal opción no se vea afectado en cuanto a sus oportunidades de percepción de acuerdo con la normativa vigente.

Que en el actual contexto de emergencia la interpretación de las disposiciones de la presente debe atender a su finalidad inspiradora (arg. art. 2° del Código Civil y Comercial de la Nación), a saber, la protección de intereses generales comprometidos en la continuidad y el regular funcionamiento del sistema de ahorro para fines determinados, sin dejar de lado en casos de duda la interpretación de las disposiciones en favor del suscriptor en tanto consumidor de un bien durable y alcanzado por tanto por las prescripciones constitucionales y legales (arts. 42 de la Constitución Nacional, 3° párrafo segundo de la Ley N° 24.240 y 1094 del Código Civil y Comercial de la Nación), aunque sin prescindir del marco general que requiere la sustentabilidad del sistema con la cual la interpretación de ese interés debe ser conciliada.

Que ello justifica, tanto más por el serio agravamiento de la situación económica general que ya ha comenzado a manifestarse en las excepcionales circunstancias epidemiológicas que son de público conocimiento, que esta INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA atienda a la evolución de la emergencia evaluando el régimen de diferimientos, bonificaciones y los restantes dispositivos que se adoptan, con vistas a su reconsideración, revisión o sustitución en caso de resultar ello pertinente a fin de mantener un razonable equilibrio en la consideración de los intereses en juego en el contexto extremadamente crítico en el que previsiblemente habrán de desenvolverse los agentes económicos, los consumidores y la sociedad en general, sobre cuya duración no es posible al presente formular estimación alguna.

Que salvedad hecha de condicionalidades como las expresadas y de su incidencia para la necesidad de eventuales cambios futuros en o del régimen que se instituye, las disposiciones de la presente fueron evaluadas favorablemente por la SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA y la SUBSECRETARÍA DE ACCIONES PARA LA DEFENSA DE LAS Y LOS CONSUMIDORES, dependiente del Ministerio y Secretaría mencionados, habiéndose dado asimismo participación en diversas reuniones de tratamiento de la problemática, a la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) y a la Cámara de Ahorro Previo Automotores (CAPA). Que en el marco de la manda legal formulada por el art. 60 de la Ley N° 27.541 la participación del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA en dichas reuniones y los puntos de consenso a que con su intervención fueron

alcanzados, habilitan a considerar que los términos de la presente reflejan la evaluación hecha por el mismo en atención a la aludida manda legal.

Recupero. Artículo 5° - El recupero de los montos correspondientes a los porcentajes de cuotas diferidos, se hará por los suscriptores mediante el pago de hasta un máximo de doce (12) cuotas una vez finalizado el plan de ahorro, las que tendrán carácter de cuotas suplementarias. El monto de ninguna de ellas podrá exceder el de una (1) cuota –alícuota + carga administrativa-.

A pesar de los esfuerzo de la IGJ quien reconoce expresamente el incremento desmedido de los precios que viene dándose desde el año 2018 y nada hizo como autoridad de control, se vio forzada a emitir esta resolución, pese a no controlar el incumplimiento palmario de los 32.1 y 32.2 de la resolución 8/15 de la IGJ por parte de FCA de ahorros para fines determinados, como en el caso de autos un nuevo incumplimiento del demandado a no solo el mandato otorgado por el suscriptor sino incumple la aplicación del decreto 14/2020 y la resolución de la cámara sobre el modo de cobro o pago del diferimiento de pago de la medida cautelar.

La exigencia del pago de una deuda aun no exigible que primando la buena fe y lealtad podrían haberle ofrecido los diferimientos impuestos , lo cual no ocurrio, deviniendo en la culminación y perdida de la posibilidad de tener su vehículo la actora, por la exclusiva culpa de PLAN ROMBO SA DE AHORROS PARA FINES DETERMINADOS actuando en contra de las reglas del mandato la sociedad de ahorro y préstamo mandataria de los ahorristas hacia quienes se obligó a cambio de las retribuciones pactadas, a agruparlos en los respectivos "círculos o grupos cerrados", a adoptar los recaudos para la percepción de las cuotas de ahorro correspondientes, a administrar los fondos del grupo, a realizar los procedimientos de adjudicación y a entregar a los ahorristas sucesivamente favorecidos en esos procedimientos los bienes que les fueran adjudicados en los plazos convenidos, previa constitución de garantías si fuera necesario y ejecutando las prendas de los adherentes adjudicatarios que incurran en mora ante la falta de pago en las cuotas mensuales salvaguardando el interés crediticio de todo el grupo de ahorristas. Tal calidad de "mandataria" constriñe a la sociedad de ahorro y préstamo al cumplimiento de sus obligaciones en la forma y el tiempo acordados y de conformidad al art. 1324 del CCyCN, bajo pena de responder ante los suscriptores en los términos de los arts. 1325 del CCyCN. Resta agregar en el punto que este mandato invariablemente se otorga con carácter "irrevocable" (art. 1330 del CCyCN), motivo por el cual, los otorgantes quedan obligados a respetar el mismo limitando los ahorristas-mandantes su derecho a desligarse del sistema. así surge de la resolución 8/15 de la Inspección General de Justicia, que aprueba las normassobre Sistemas de Capitalización y Ahorro para Fines Determinados, y que en el artículo 28.2de su Anexo A, prevé lo siguiente: “Las entidades administradoras, en su condición de mandatarias de los suscriptores, deberán obrar con la lealtad, buena fe, y diligencia necesariaspara asegurar la obtención de acuerdos con los proveedores de los bienes que garanticen el mantenimiento de los valores durante el período comprendido entre la fecha de emisión y la

de vencimiento de las cuotas.”. Anteriormente, la derogada Resolución General I.G.J. N° 26/2004, establecía expresamente en su artículo 7.4.1. que las reglas del mandato (artículo 1.869 y concordantes del Código Civil) se aplicarán a las relaciones jurídicas habidas entre los suscriptores y la entidad administradora. Esta cuestión también se desprende del mismo contenido del contrato (Art. 29): “El Solicitante y/o Adherente y/o Adjudicatario en su caso, autorizan a la Administradora a realizar todos y cada uno de los actos necesarios para el debido cumplimiento del objeto de este Plan de Ahorro.-

Las presentes condiciones generales constituyen el marco de autorización irrevocable que el Solicitante y/o Adherente y/o Adjudicatario otorga a la Administradora, para realizar todos y cada uno de los actos necesarios para la debida administración del sistema.-”. De allí que la existencia de un mandato se trata de un hecho que no admite controversia. No sólo forma parte del contrato mismo que las partes han suscripto, sino que además, dicho carácter surge de las normativa del ente regulador (IGJ), razón por la cual devienen de aplicación las normas contenidas entre los arts. 1.319 y 1.334 del Código Civil y Comercial. Tal calidad de “mandataria” constriñe a la sociedad de ahorro al cumplimiento de sus obligaciones en la forma y el tiempo acordado.

sin razón ni explicación alguna contrariando no solo el mandato otorgado a FCA de ahorros para fines determinados, sino el Art. 4 de la Ley de defensa del consumidor el deber de información. *cabe recordar que el artículo 42 de la Constitución Nacional establece que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo a una información adecuada y veraz”. Por su parte, y como derivación de la manda constitucional, el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor (t.o ley 26.631) establece que “El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión”.*

El fundamento del deber de información está dado por la desigualdad que presupone que solo una de las partes se encuentre informada sobre un hecho que puede gravitar o ejercer influencia sobre el consentimiento de la otra. Al respecto, la jurisprudencia ha dicho que el deber de información constituye una valiosa herramienta para conjurar la superioridad económica jurídica que generalmente detentan los proveedores. La información que el proveedor de bienes y servicios debe suministrar a su cliente o usuario tiene que permitir que el consumidor, aún aquél carente de idoneidad, acceda a la comprensión integral de la implementación del contrato con sus consecuencias y efectos (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - Sala B, “Fernández, Miguel Ángel c/ Plan Ovalo SA de ahorro para fines determinados s/ ordinario”). La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza: “En materia de defensa del consumidor el deber de informar (debe existir en toda relación de consumo) se corresponde con los principios de confianza y transparencia que deben regir las relaciones entre consumidores y quienes produzcan, importen o

comercialicen cosas o presten servicios.” (Expte. N° 13-02089164-9/2, “PEUGEOT CITROEN S.A. EN J° 252130/53457 ‘TOMÁS, MARTÍN ALBERTO C/ PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. P/ DAÑOS Y PERJUICIOS’ P/ RECURSO EXTRAORDINARIO PROVINCIAL”, 10/12/2019).

Entonces ¿que debió hacer PLAN ROMBO SA DE AHORROS PARA FINES DETERMINADO ante la sentencia de cámara civil y comercial sala III de fecha 12 de marzo de 2021 en virtud del mandato? firmando que la solución se encuentra en el art. 1.324 del CCCyN, que en su inc. b) *le obliga a dar aviso inmediato al mandante de cualquier circunstancia sobreviniente que razonablemente aconseje apartarse de las instrucciones recibidas, requiriendo nuevas instrucciones o ratificación de las anteriores, y adoptar las medidas indispensables y urgentes.* Nada hizo siendo que pretende cobrar una deuda exorbitante con intereses usurarios sobre un monto que “no estaba en mora” si comunicaba y ofrecía los diferimientos muchos ahorristas como la Sra. Cattolica podrían haber liquidado su deuda, sin embargo, no se tomaron ni dieron a conocer medidas urgentes y/o pedido instrucciones a los miembros del grupo acerca de estas circunstancias extraordinarias sucedidas, todo este daño injusto se hubiera evitado y hoy tendría su vehículo sin problemas

Esa suma es injusta e indebida en los montos que se pretende cobrar, el mandatario, ante una posible colisión de intereses, debe preferir los de su mandante en pos de los propios, y si no puede dar cumplimiento a ello, debe renunciar. Ni le dio prioridad a los intereses de su mandante, ni renunció. Esto se desprende del art. 1.325 CCyCN.

Por otra parte, la colisión entre los intereses de mandante -la consumidora- y mandatario -la sociedad de ahorro- se patentiza en lo expresado ut supra, al hacer referencia a que ésta última conforma un mismo grupo económico con el fabricante y concesionarios oficiales, privilegiando los intereses de éste en detrimento de los de sus mandantes. Vemos, entonces, que la demandada definitivamente ha incurrido en un incumplimiento de sus obligaciones. *cuando el consumidor suscribe la solicitud de adhesión, está integrando desde ese momento el carácter de adherente a todo el sistema como una única unidad y de ninguna manera puede sujetarse sus derechos a una condición suspensiva -como pretenden las empresas- de completarse el número de cada grupo. Éste es un riesgo que debe ser soportado por la empresa terminal y su grupo económico y no por el adherente-consumidor. En esto queremos ser claros y terminantes. Si los grupos económicos empresariales programan un modo de comercialización de bienes, el consumidor no puede estar condicionado, máxime cuando es él el que financia (con su cuota de financiamiento) la fabricación del bien, pues la fábrica terminal debe asumir el riesgo empresarial de lanzar su plan al mercado. En consecuencia, a partir de la solicitud del contrato, no es válida la cláusula del contrato que condiciona su incorporación a que se conforme el total del grupo suscripto. Esta cláusula es contraria a la buena fe en la conformación del contrato (art. 1198 Cód. Civil; actuales arts. 9, 729, 961, 991, 1061, 1067 y 1725 del CCyCN y 37 último párrafo LDC); es abusiva, pues condiciona a un hecho meramente potestativo de la propia empresa (art. 1071 Cód. Civil,*

actuales arts. 10 y 11 del CCyCN), y repugna la finalidad teleológica de la contratación" (GHERSI Carlos Alberto y MUZIO Alejandra Esther, "compraventa de automotores por ahorro previo" paginas 58ª 62, Ed. Astrea Bs.As. 1996)

La sociedad administradora ante esta circunstancia excepcional debió haber solicitado instrucciones a sus mandantes [grupo de ahorristas según art. 1324 inc. b del CCyCN, comunicar e informar esa circunstancia relevante [art. 1100 del CCyCN] algo que JAMÁS HIZO. Por el contrario, se mantuvo en silencio, sin explicar a los ahorristas, los modos o mecanismos para el pago de los diferimientos de cuotas por la medida cautelar del defensor del pueblo, vedando los diferimientos que ordeno la resolución 14/20 de la IGJ y lo establecido por la Excma Cámara Civil y Comercial Sala III, viene fijando unilateralmente el monto adeudando, teniendo cautivo a los ahorrista con el objetivo de cobrar una suma exorbitante que beneficie a la terminal automotriz que creó a esa sociedad administradora, garantizándole el flujo de dinero (millones y millones de pesos) que proviene de los miles de ahorristas que pagaron sus cuotas hacia la terminal. Ninguna acción hizo en defensa de sus mandantes (grupo de ahorristas) de acuerdo a los lineamientos que le exigía el art. 1325 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Todo esto genera además una situación jurídica abusiva en contra del ahorrista, conducta prevista en el Art. 1120.— *“Situación jurídica abusiva. Se considera que existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos”.* existe una situación jurídica abusiva cuando nos hallamos frente a un supuesto de desequilibrio en perjuicio del consumidor que se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos; situación que se da cuando se elabora un entramado contractual, un sistema de vínculos jurídicos y económicos conexos que determina una situación de cautividad o de limitación de derechos y facultades del consumidor o usuario

Como consecuencia de todo lo expuesto concluimos:

1. **Es abusiva la fijación de la deuda en referencia a los valores de aplicación del diferimiento según Resolución 14/2020 de la IGJ y lo ordenado por la Excma Cámara Civil y Comercial sala III siendo los valores que pretende cobrar inaplicables a la actora por no haberse descontado de las boletas de pago suma alguna,** monto que son falaces y que torna la prestación excesivamente onerosa en la relación que existía al momento de contratar.
2. **Se ha producido un perjuicio irreparable al haberse liquidado el grupo sin tomar en cuenta la aceptación de la adjudicación por solicitar monto diferido por cautelar del defensor del pueblo de Tucumán que no le fue aplicada y que altera la en forma extraordinaria la relación existente al contratar.** Las circunstancias económicas, no estipuladas, ni habilitadas en el contrato, como la devaluación de la moneda e incluso las retenciones a las exportaciones de

automotores, han motivado la aplicación de medidas cautelar y diferimientos de cuotas en porcentajes para salvaguardar los contratos, siendo que los montos diferidos afectan abusivamente en el aumento de una deuda que impide que los ahorristas puedan cancelarla.

3. **Perdida del bien , se impidió acceder a la adjudicación por sorteo daño irreparable**
4. **Falta de Información fehaciente:** Que asimismo la administradora tiene la obligación de notificar fehacientemente al adherente/adjudicatario que existen mecanismos que permitían una forma de pagar en la cautelar del defensor del pueblo, cosa que no se produjo en el caso de marras.
5. **La accionada incumple con lo dispuesto por el art 4. 8.9 .19 y20 del contrato de suscripción.**
6. **La accionada Incumplió en el deber de mandato.**
7. **Existencia de una situación jurídica abusiva.**

Con motivo de todo lo expuesto solicitamos se ordene a la firma PLAN ROMBO S.A. DE AHORROS PARA FINES DETERMINADOS a restituir los importes retenidos indebidamente, asimismo responda por los daños y perjuicios originados a mi mandante y proceda a la entrega del vehículo oportunamente adjudicado y la reparación de daños y perjuicios por la violación de la reglas del mandato originadas, en contra de todo lo estatuido y estipulados por los organismos oficiales de la República Argentina.

IV.-) DERECHO:

A) Enriquecimiento sin causa:

En el presente caso, considero configurado un enriquecimiento sin causa de la demandada a costa de su otrora cliente. El Código Civil y Comercial de la Nación, en su Art. 1794, dice: *“Caracterización. Toda persona que sin una causa lícita se enriquezca a expensas de otro, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio de un bien determinado, debe restituirlo si subsiste en su poder al tiempo de la demanda.”*

En el caso de marras se encuentra configurado el enriquecimiento sin causa de **\$22.704.283** valor actual del vehículo(Pesos veintidós millones) por parte de la firma PLAN ROMBO S.A. DE AHORROS PARA FINES DETERMINADOS siendo que privo a la actora de tener su vehículo pese a abonar todas la cuotas las 84 al valor del 100% haciendo caso omiso a la aceptación formulada por carta documento, atando la misma al pagode la cautelar que jamás le fuere aplicada

b) Violaciones específicas a deberes y derechos del consumidor:

B.1.-) deber de información:

La primera violación en que incurre la hoy accionada al deber de información establecido por la ley de defensa al consumidor, **surge de la propia cláusula 9 a la 16 del** contrato de adhesión al plan de ahorro.; *CUOTA PURA: Importe resultante de dividir el Valor Básico reajutable vigente a la fecha de pago, por la cantidad de meses de duración del plan pactados al momento de la suscripción. CUOTA MENSUAL: Integrada por: a) Cuota Pura; b) Importe de la Cuota Mensual del Seguro de Vida Colectivo, si correspondiere; c) Gastos de Administración; d) Cuota Pura Gastos de Entrega en el supuesto que se incluyeran en la cuota, según ANEXO que forma parte de la presente. DERECHO DE SUSCRIPCION: 3% del valor del Automotor Tipo, a ser abonado a PLAN ROMBO por el Suscriptor en el momento de firmar la Solicitud de Suscripción. GASTOS DE ADMINISTRACION: Importe a cobrar mensualmente por PLAN ROMBO, resultante de aplicar sobre el Valor Básico reajutable, el porcentaje establecido por cada plan, de conformidad con lo previsto en la Cláusula 1 del Capítulo IV. TALONES DE PAGOS: Por cada una de las cuotas a vencer PLAN ROMBO remitirá mensualmente al Suscriptor un talón impreso en el que se indicará: número de grupo y orden, número de la cuota que debe abonar, el importe y el vencimiento de la misma, el Valor Móvil del Automotor Tipo y el valor móvil y porcentual que cancela del gasto de entrega, en el supuesto que se incluyera en la cuota, según ANEXO que forma parte de la presente. ADJUDICACION: Asignación de un Automotor al Suscriptor, efectuada por PLAN ROMBO. ADJUDICATARIO: Suscriptor a quien se le ha asignado un Automotor. DERECHO DE ADJUDICACION: 1,5% del valor total del Automotor Tipo, vigente a la fecha de la Adjudicación, a ser abonado a PLAN ROMBO por el Adjudicatario como requisito previo para entrar en posesión del automotor adjudicado. PROMOCION DEL PLAN: PLAN ROMBO efectuará las gestiones necesarias para promover el Plan por su cuenta, y/o a través de Agentes designados a tal efecto y/o a través de la Red de Concesionarios o Agentes del Fabricante y Representante del Fabricante Exportador de automotores, cuyas marcas se comercialicen bajo este Plan. PLAN ROMBO será responsable por los actos de los Concesionarios y Agentes del Fabricante o Representante del Fabricante Exportador en cuanto se refieran al contrato de ahorro en cualquiera de sus aspectos, con las limitaciones establecidas en el frente de esta Solicitud de Suscripción, bajo el título NOTAS IMPORTANTES.*

En razón de lo expuesto en las cláusulas del contrato consideramos que existe una violación al deber de información, toda vez que la accionada en la situación del Señora cattolica no comunico, la posibilidad de diferir la supuesta deuda generada por la CAUTELAR DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, la cual tenía la facultad de abonarse conforme el decreto 14/2020 de la IGJ y conforme la sentencia de Cámara civil Sala III de

fecha noviembre de 2022 exigiendo un pago exorbitante por una suma que no explicada acabadamente cual es el concepto y como se constituye.

Decimos supuesta por que de ninguna de las boletas surge el monto de medida cautelar o diferimiento aplicado de lo que se llega a la conclusión que PLAN ROMBO NO APLICO el diferimiento de 20% de la alícuota.

La ley 24240, su artículo 4º expresa ***“Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada en soporte físico, con claridad necesaria que permita su comprensión. Solo se podrá suplantar la comunicación en soporte físico si el consumidor o usuario optase de forma expresa por utilizar cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición”***.

El Código Civil y Comercial de la Nación replica los contenidos del concepto del estatuto especial con algunas diferencias. *Regula que el proveedor está obligado a suministrar información al consumidor en forma cierta y detallada, respecto de todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, las condiciones de su comercialización y toda otra circunstancia relevante para el contrato. Reitera que la información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con la claridad necesaria que permita su comprensión Art 1100.* El derecho a la información tiene tutela constitucional conforme al art. 42, C.N., como superador de la entronización de la autonomía de la voluntad propia de la codificación decimonónica que presupone a los contratantes como libres e iguales, sin más referencia a las pautas del negocio que las remisiones al principio de ***buena fe***

La importancia que adquiere la información se evidencia en que el conocimiento, en nuestros días, es fuente de poder. Es por eso que aquello que suceda en cuanto al acabado cumplimiento de este deber por parte del proveedor tiene relevante significado, dado que la carencia total de información que a priori padece el consumidor es una de las más importantes bases de su condición de débil jurídico y presupuesto de su vulnerabilidad. Tanto que, sin existir el derecho a ser debidamente informado, el consumidor tendría una tutela relativa, desde que la autodeterminación del consumidor es posible gracias a la información que recibe.

Ha sido dicho que esta constituye "un elemento de conocimiento suministrado espontánea u obligatoriamente, por una parte, que se halla informada (deudor) a la otra que, por desinformada, en principio se constituye en acreedora de la información".

Como la información y la contratación son dinámicas, y, aunque el Código no haya reflejado en forma determinada este carácter, el deber de información ha de cumplirse tanto en forma previa a entablarse la relación de consumo, como de manera concomitante a esta y también con posterioridad. En el primer ámbito, deriva del deber de cooperación contractual y permite elecciones de consumo fundadas y racionales (se relaciona con la libre elección, aplicándose la idea del consentimiento informado), y en el segundo permite una utilización adecuada del producto o servicio contratado (se relaciona con el derecho a la salud y seguridad, y con la protección de los intereses patrimoniales). A su vez, incluye toda la información que resulte indispensable para después de celebrado el contrato o entregada la cosa o el servicio, a los fines de un disfrute adecuado, comprensivo de ser anoticiado de los riesgos implicados, su naturaleza y complejidad, prolongándose el deber del proveedor a través de toda la ejecución contractual.

El objetivo es que el consumidor sepa concretamente qué va a adquirir, para qué sirve y cómo se usa, para que pueda formular una razonada decisión.

No debe omitirse brindar información a los consumidores de la condición de "deficiente, usado o reconstituido", en los términos del art. 9° de la ley 24240, de cosas o bienes ofertados en el mercado al público general, por cuanto esta información será determinante para que el consumidor tome una decisión razonada acerca de su adquisición, habiendo evaluado previamente la calidad del objeto y su utilidad, estando ambos supuestos directamente relacionados con la protección de su patrimonio, por cuanto serán elementos decisivos al momento de determinar el precio de compra.

En este caso el deber de información fue deliberada y explícitamente violado por la demandada, obrando en contra de la Equidad de los ahorristas: *La Administradora administrará los Grupos con total igualdad y equidad, evitando conceder beneficios o ventajas, limitado a determinadas personas, que importe en definitiva una desigualdad en el trato entre quienes se encuentren en situación análoga. Al mismo tiempo la Administradora administrará los Grupos con total imparcialidad, de modo objetivo, justo, con valoración de todos los aspectos en juego y con aplicación estricta de las normas jurídicas.-*

La doctrina distingue entre los casos de inejecución de la obligación de informar y del incumplimiento de esta. En el primer caso, el comportamiento informativo es aún posible, estando el proveedor en mora a su respecto, pudiendo solicitarse la ejecución forzada de la obligación o la ejecución por un tercero a costa del deudor originario. Todo dependerá de la particular naturaleza de la obligación de informar, su contenido en el caso y su contexto. Podrán demandarse, por ejemplo, la entrega de manuales de instrucciones de aparatos tecnológicos o electrodomésticos, el cumplimiento de los cursos de capacitación ofrecidos por el producto u otras variantes. En el segundo, donde directamente se ha omitido cumplir con este deber, es facultad del consumidor dejar sin efecto el acto y extinguir la relación jurídica con el proveedor. Es el caso de omisiones

determinantes, que afectan al acto y lo vician, ya que de haber sido informado debidamente el consumidor no hubiera contratado o lo hubiera hecho en forma diferente. “María B. JAPAZE, 'Incumplimiento de la obligación de informar, dispositivos preventivos, resarcitorios y de sanción previstos en el sistema protectorio', en Daños a la Persona y al Patrimonio, Tomo I, Buenos Aires, Nova Tesis, 2011, pp. 655 y sigs.”

B) Violaciones específicas a deberes y obligaciones como mandatario:

El funcionamiento del sistema de planes de ahorro cerrado, denota una evidente complejidad, ya que de la dinámica del mismo emergen relaciones de distintas naturalezas entre las partes que intervienen (Adherente – Administradora de plan de ahorro – Fabricante).

La realidad de los hechos es que entre la Administradora y mi mandante existe un contrato de mandato, conforme lo establece el contrato expresando *“el adherente otorga a favor de la Sociedad Administradora poder irrevocable para realizar todos y cada uno de los actos necesarios para la debida administración del sistema durante toda la vigencia del Grupo”*; dicho poder tiene vigencia desde la constitución del Grupo Cerrado hasta la disolución total.

Es por lo expresado, que correspondía a la administradora cumplir con las reglas contenidas en el Código Civil y Comercial en cuanto regula el contrato de mandato en su artículo 1324 estipulando que el mandatario debe *“...a) cumplir los actos comprendidos en el mandato, conforme a las instrucciones dadas por el mandante y a la naturaleza del negocio que constituye su objeto, con el cuidado que pondría en los asuntos propios o, en su caso, el exigido por las reglas de su profesión, o por los usos del lugar de ejecución;”*

El mandatario tiene la obligación de velar por los intereses de los ahorristas, quienes en definitiva son los que otorgaron el mandato para actuar en su representación. Es por ello que denota un claro incumplimiento de la accionada al no realizar el mínimo deber de aplicar al Sra. Cattolica lo más beneficioso o el diferimiento de la resolución 14/2020 de la IGJ o la sentencia de cámara que ordenaba que se difieran el pago de las sumas descontadas por medida cautelar en 24 cuotas más gastos administrativos, sin intereses por que no estaba en mora , ni mucho menos adeudaba por no estar fijado en las boletas de pago. Violando el fin del contrato Artículo 51 del Decreto N° 142.277/43A los efectos previstos en el artículo 51 del Reglamento dictado por el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 8 de febrero de 1943, conste que queda expresamente establecido que las disposiciones de los artículos 37.a 50 de dicho Reglamento y las legales o reglamentarias que puedan sustituirlas en el futuro, serán de aplicación artas presentes Condiciones GeneralesI II - ObjetoEl objeto de los planes ofrecidos por PLAN ROMBO es proporcionar al titular de la Solicitud de Suscripción, el Automotor Tipo indicado en la misma o el sustituto vigente, mediante adjudicación reglada por estas Condiciones Generales, empleando fondos aportados por el conjunto de suscriptores al Grupo y plan respectivo.

Dejando en evidencia su incumplimiento al art. 1324 que expresa: *Obligaciones del mandatario. El mandatario está obligado a: a) cumplir los actos comprendidos en el mandato, conforme a las instrucciones dadas por el mandante y a la naturaleza del negocio que constituye su objeto, con el cuidado que pondría en los asuntos propios o, en su caso, el exigido por las reglas de su profesión, o por los usos del lugar de ejecución; b) dar aviso inmediato al mandante de cualquier circunstancia sobreviniente que razonablemente aconseje apartarse de las instrucciones recibidas, requiriendo nuevas instrucciones o ratificación de las anteriores, y adoptar las medidas indispensables y urgentes; c) informar sin demora al mandante de todo conflicto de intereses y de toda otra circunstancia que pueda motivar la modificación o la revocación del mandato; g) entregar al mandante las ganancias derivadas del negocio, con los intereses moratorios, de las sumas de dinero que haya utilizado en provecho propio; h) informar en cualquier momento, a requerimiento del mandante, sobre la ejecución del mandato; i) exhibir al mandante toda la documentación relacionada con la gestión encomendada, y entregarle la que corresponde según las circunstancias. Si el negocio encargado al mandatario fuese de los que, por su oficio o su modo de vivir, acepta él regularmente, aun cuando se excuse del encargo, debe tomar las providencias conservatorias urgentes que requiera el negocio que se le encomienda.*

Esa suma es injusta e indebida en los montos que se pretende cobrar, el mandatario, ante una posible colisión de intereses, debe preferir los de su mandante en pos de los propios, y si no puede dar cumplimiento a ello, debe renunciar. Ni le dio prioridad a los intereses de su mandante, ni renunció. Esto se desprende del art. 1.325 CCyCN.

Por otra parte, la colisión entre los intereses de mandante -la consumidora- y mandatario -la sociedad de ahorro- se patentiza en lo expresado ut supra, al hacer referencia a que ésta última conforma un mismo grupo económico con el fabricante y concesionarios oficiales, privilegiando los intereses de éste en detrimento de los de sus mandantes. Vemos, entonces, que la demandada definitivamente ha incurrido en un incumplimiento de sus obligaciones.

El incumplimiento de la accionada se logra explicar en la relación entre esta y la fábrica, toda vez que persiguen el mismo fin. De hecho, es la propia fábrica la que crea las sociedades de ahorro para captar clientes y poder colocar sus productos. Este conflicto de intereses en el que incurre la administradora debido a que denota no obrar en pos de los intereses de sus mandantes si no en los intereses del fabricante, va en contra del art 1325 del Código Civil y Comercial: *Si media conflicto de intereses entre el mandante y el mandatario, éste debe posponer los suyos en la ejecución del mandato, o renunciar. La obtención, en el desempeño del cargo, de un beneficio no autorizado por el mandante, hace perder al mandatario su derecho a la retribución.*

Desde el momento de la suscripción PLAN ROMBO de frente informa su violación del mandato y desnaturalización del contrato cuando establece en su cláusula 2 *RESPONSABILIDAD: PLAN ROMBO, a efectos de asegurar el presente Plan, mantendrá a éste en vigencia mientras RENAULT ARGENTINA S.A. posea nominativamente la mayoría de las Acciones de PLAN ROMBO. Queda bien entendido que ambas Sociedades son solidariamente responsables por el cumplimiento del Plan con todos los Suscriptores del*

mismo y que RENAULT ARGENTINA S.A. conservará la mayoría de las Acciones de PLAN ROMBO hasta que se den por cumplidas las obligaciones contraídas con la totalidad de los Suscriptores del Plan. Asimismo, RENAULT ARGENTINA S.A. acepta las Condiciones Generales del presente Plan, como así también cualquier modificación fundamentada que sea introducida por intermedio de la Inspección General de Justicia.

Queda probado la existencia de un grupo económico pergeñado para perjudicar a los ahorristas y asegurar las ganancias y ventas a RENAULT.

C Situación Jurídica Abusiva

Por ultimo no podemos soslayar que la situación o estado en que se encuentra la Señora JOANA ELIZABETH CATTOLICA por una multiplicidad de factores y actos jurídicos conexos, lo pone en lo que se conoce como "situación jurídica abusiva" definida por el Art. 1120.CCyC— *Situación jurídica abusiva. Se considera que existe una situación jurídica abusiva cuando el mismo resultado se alcanza a través de la predisposición de una pluralidad de actos jurídicos conexos.*

El concepto de situación jurídica remite a un estado de cosas creado por una combinación de hechos o actos jurídicos, a raíz del cual el consumidor queda ubicado en una determinada posición frente a uno o más proveedores. Es decir, esa combinación de hechos o actos jurídicos generan un contexto en el que queda inserto el consumidor. Sostiene - Lorenzetti que, " *desde el punto de vista jurídico el término 'situación', alude a una serie de normas emanadas de la autonomía privada, en la que se crea una esfera de actuación*". Así, cuando " *este contexto es creado por el autor para desnaturalizar, obstaculizar o impedir el ejercicio de facultades, hay situación jurídica abusiva*" (Lorenzetti, 1995).

el concepto de " situación jurídica" resulta una novedosa incorporación del CCyCom. Por esa razón, la definición precisa del alcance del concepto y su aplicación requerirá de la construcción que elabore la doctrina y la jurisprudencia.

El concepto se introduce en el CCyCom:

a) en la regulación del abuso del derecho, donde se dispone el deber judicial de " ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva " (art. 10, último párrafo CCyCom) ; b) en la definición de hecho jurídico como el acontecimiento que " produce el nacimiento, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas" (art. 257, CCyCom); y c) en la definición de acto jurídico, al que se define como " el acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas" (art. 259, CCyCom).

Para poder centrarnos en la tipificación de esta conducta, pide la necesaria existencia de pluralidad de contratos o conexidad contractual, que es la propia génesis del contrato de plan de ahorro para adquirir vehículos. " *El consumidor ingresará al sistema como adherente y formará un grupo cerrado que será integrado por una cantidad de consumidores que duplica a la cantidad de cuotas. Tomando como ejemplo en un plan de 84 meses serán 168*

adherentes. Cada mes, si todo sale bien, se entregarán dos automóviles (uno por sorteo y uno por licitación) a consumidores que dejarán de ser adherentes y pasarán a ser adjudicatarios. De ese modo, al concluir el plan transcurridos los 84 meses, todos los 168 consumidores habrán recibido su automóvil.”

El consumidor ingresa al sistema a través del contacto con un concesionario o agente. Sin embargo, ese concesionario no "figura" en el contrato, y que la contraparte es la administradora del círculo, que a su vez- tampoco es el fabricante o importador del bien. La conexidad hace que resulte difícil distinguir sobre quién recae cada obligación. A grandes rasgos podemos decir que: a) El concesionario es quien formaliza la venta (y frente a quien se realizarán la mayoría de los reclamos). Pero intentará la fácil respuesta de que no es más que un intermediario, ya que quien cobra, fabrica y entrega el bien es en realidad otra empresa. b) El administrador? es quien organiza el negocio. Se trata de una sociedad constituida a ese fin, al menos formalmente diferente del fabricante. Es el encargado de gestionar el contrato: recibe el dinero y organiza los sistemas de adjudicaciones. c) La terminal es quien fabrica o importa el automóvil.

ante contratos con tantas partes y tantas situaciones (los contratos contienen un lenguaje propio, hasta el punto de que incluso incluyen un tesoro), el proveedor no solo debe informar, sino que además debe asesorar al consumidor. Los comercializadores gozan de posición dominante (art. 11, CCCM) y tienen el deber de actuar de buena fe (art. 9º, CCCN), mostrando al consumidor sus diferentes opciones y cuál de ellas resultaría más ventajosa según sus intereses. Lo dicho será aun más indiscutible si se sostiene que se trata de un mandatario, que tiene el deber de defender los derechos de su mandante. El proveedor monopoliza el conocimiento del contrato y ello le impone un mayor deber de obrar con prudencia, diligencia (art. 1725, CCCN) y de hablar claro (art. 985, CCCN). Además, deberá tenerse en cuenta la expectativa generada en el consumidor, que difícilmente comprenda cabalmente el contrato que firmó, considerando particularmente que el contrato no solo obliga a lo que dice, sino también a lo que buenamente podamos comprender de él (art. 961, CCCN)

entonces explicado la trama consecuencia del diferimiento de la original cautelar que propuso el defensor del pueblo de la provincia de Tucumán, se difirió durante ese tiempo solo el 20% de la alícuota, en el caso de la actora no surge de las boletas de pago la aplicación de la medida cautelar que por medio de un informe de deuda expedido por RUIZ AUTOMOTORES SA pretendió cobrar atando ese monto de 5.055.489, para que la Sra. Cattolica acceda a la adjudicación de su vehículo.

Una suma que no es explicada de manera acabada como se conforma, distando mucho de la realidad, siendo que el monto “originario” no estaba en mora y establecido por la Resolución 14/2020 de la IGJ como de la Excma. Cámara Civil y Comercial SALA III , podía pagarse de manera diferida en nuevas cuotas, explicando el mecanismo, sin perjuicio de eso ocultando y monopolizando la información, exigen la totalidad del pago de algo que no se aplico.

De lo que se colige que el la Sra. CATTOLICA JOANA ELIZABETH perdió de que se le entregue por adjudicación un vehículo RENAULT LOGAN LIFE 1.6, por una deuda que no género, por un diferimiento que no se le aplico, que no tiene sentido su composición, y que no le brindan las posibilidades de pago que la IGJ organismo de contralor del comportamiento de las administradoras de los planes ahorros ordena, ni mucho menos cumple lo fijado por la Excma. Cámara Civil y Comercial SALA III. Es evidente que estamos en una situación jurídica abusiva creada por el accionado *plan rombo SA de ahorro para fines determinadas. Que lejos está de cumplir el mandato que le fuere otorgado.*

Por ultimo si la administradora del plan con su accionar se quedo con un vehículo abonado en su totalidad por la 84 cuotas, es una situación injusta y confiscatoria.

V.-) DAÑOS

El art. 40 bis de la LDC expresa: “Daño Directo: Es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionada de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o prestador de servicios. Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo”.

El menoscabo debe ser ocasionado de manera inmediata, lo cual excluye de la noción a todo daño que sea consecuencia mediata de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios.

El perjuicio debe ser susceptible de apreciación pecuniaria. En verdad, todo daño, necesariamente, debe ser susceptible de apreciación pecuniaria. También el daño moral. Tan lo es, que es susceptible de ser valorado y cuantificado en dinero, conclusión que no varía por el hecho de que la indemnización cumpla función satisfactiva y no estrictamente de equivalencia.

DAÑOS EN EL MARCO DEL CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION.

Art. 1737. CCyCN— “Concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio, o un derecho de incidencia colectiva”.

Concepto de daño la ley define al daño de una manera amplia. No sólo es daño la lesión a un derecho subjetivo sino directamente a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico. La lesión debe ser entonces a un interés tutelado por la ley, aunque salvo prueba en contrario de esa falta de reprobación, todos los intereses simples se presumen protegidos por la ley. El daño es la "lesión disvaliosa de un interés sobre un bien jurídicamente protegido " (Padilla)

El ordenamiento protege intereses, y el hecho dañoso entraña el desconocimiento del interés de la víctima, por lo que el derecho remedia esa inobservancia con un ajuste de intereses y entonces "ante la lesión de un interés protegido, la ley reconoce otro interés (el de ser reparado) al que queda subordinado cualquier interés del sujeto que señala como deudor " (Sáinz- Cantero Caparrós).

Art. 1738. — “Indemnización. La indemnización comprende la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida”.

Art. 1739. — “Requisitos. Para la procedencia de la indemnización debe existir un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. La pérdida de chance es indemnizable en la medida en que su contingencia sea razonable y guarde una adecuada relación de causalidad con el hecho generador” El art. 40 bis de la LDC expresa: *“Daño Directo: Es todo perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionada de manera inmediata sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor de bienes o prestador de servicios. Los organismos de aplicación, mediante actos administrativos, fijarán las indemnizaciones para reparar los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes objeto de la relación de consumo”*.

El menoscabo debe ser ocasionado de manera inmediata, lo cual excluye de la noción a todo daño que sea consecuencia mediata de la acción u omisión del proveedor de bienes o del prestador de servicios.

El perjuicio debe ser susceptible de apreciación pecuniaria. En verdad, todo daño, necesariamente, debe ser susceptible de apreciación pecuniaria. También el daño moral. Tan lo es, que es susceptible de ser valorado y cuantificado en dinero, conclusión que no varía por el hecho de que la indemnización cumpla función satisfactiva y no estrictamente de equivalencia.

REPARACION PLENA:

Art. 1740. — “Reparación plena. La reparación del daño debe ser plena. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso, sea por el pago en dinero o en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, excepto que sea parcial o totalmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, en cuyo caso se debe fijar en dinero. En el caso de daños derivados de la lesión del honor, la intimidad o la

identidad personal, el juez puede, a pedido de parte, ordenar la publicación de la sentencia, o de sus partes pertinentes, a costa del responsable”.

A.- DAÑO MORAL:

El daño moral puede ser definido como “la lesión a los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y en general toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria” (cfr Bustamante Alsina, "Tratado General de la Responsabilidad Civil", Abeledo-Perrot, Bs.As. 1989, pág. 208).-

En el presente caso, mi cliente sufrió y sufre un trato abusivo de parte de la demandada, mi mandante resulto adjudicada su vehículo por sorteo por la misivas enviadas, ante esto ocurrió al concesionario RUIZ AUTOMOTORES SA pretendió atar a los requisitos de aceptación de la unidad una deuda por diferimiento de cuota consecuencia de la medida cautelar propuesta por el defensor del pueblo de la provincia de Tucumán que nunca se le aplico conforme surge de las boletas de pago, más aun tomando conocimiento el accionado PLAN ROMBO SA DE AHORROS PARA FINES DETERMINADOS de que tenía que brindarle opciones de diferimiento del pago del monto adeudado, el accionado opto pro ocultar la misma de manera deliberada y maliciosa, está obligándole al pago de una suma exorbitante para poder obtener su vehículo adjudicado por sorteo y aceptado por carta documento la negativa del accionado a aplicar el mecanismo que corresponde para la obtención del vehículo puso obstáculos insalvables que llevaron a la liquidación del plan y la perdida de vehículo LOGAN LIFE 1.6 que pago durante 84 cuotas, lo que genera una situación de angustia aflicción, malestar y sufrimiento, con motivo de los esfuerzos que debió hacer mensualmente para cumplir con el pago de todo el plan de ahorros de 84 cuotas y encontrarse al último con una deuda de MAS \$5.000.000.- la cual era impagable e inaceptable su atadura a los requisitos de adjudicación.

El daño moral es uno de los rubros indemnizatorios más difíciles de cuantificar porque se carece de cánones objetivos. Lo más adecuado es utilizar un modelo donde aparezca una fuente que permita trocar el sufrimiento por alegría o placer y producir nuevamente la armonización perdida; encontrar un sucedáneo al estado negativo del sujeto que prevalezca y se vuelva estable en situación de dominación respecto de la estructura en que interactúa (Gherzi, Carlos Alberto: Daño moral y psicológico, 2ª edición, Buenos Aires, Astrea, 2002, pág. 179/181).

El goce concreto con que debe buscarse compensar a cada damnificado está directamente relacionado con los placeres específicos con que acostumbra a regocijarse, los que resultan un elemento importante a tener en cuenta a fin de acercarse a la ansiada pero imposible objetividad a la hora de fijar una indemnización justa. Porque como dice Gherzi, “la disponibilidad de recursos para satisfacer su placer o descanso vacacional, encontrará el

límite en aquellos recursos de su clase social” (Gherzi, Carlos Alberto: Daño moral y psicológico, 2ª edición, Buenos Aires, Astrea, 2002, pág. 197).-

A las claras esta que como enseñaba el Carlos Gherzi que el sistema era “diabólico” *debemos tener en cuenta que el sistema de ahorro previo permite a las empresas (fabricante automotriz y sociedad administradora) en épocas de crisis e inflación, en que no les es rentable tomar dinero de los bancos por su alto costo (interés real), inducir al consumidor a entregar sus ahorros por este sistema de autoplan sin costo para las empresas, y éstas obtienen así un flujo de dinero de manera constante. De esa manera, las empresas logran reasignar al sistema un constante flujo de fondos a través de las cuotas, pero en forma invertida a décadas anteriores, previa a la entrega del bien automotor. Desaparece el banco como intermediario en la financiación de inversión empresarial; su lugar es ocupado por el ahorrista en forma directa que provee el recurso escaso y costoso: el dinero. Por tanto, las empresas obtienen fondos de inversión sin costo financiero alguno, es más, en realidad la administradora recibe una comisión por administrar el dinero de los ahorristas y después cobra por la financiación del precio final Para concluir reflexionando que "es más el consumidor entregó dinero sin intereses ¿y todavía le cobran por recibirlo?. Usualmente el ahorrista llevaba su dinero al banco, recibía un interés y el capital (ajustable o no) seguía siendo suyo y poseía la libre disponibilidad. Ahora, entrega el dinero, pierde la titularidad del capital, no tiene la libre disponibilidad, no recibe intereses y aún le cobran por administrarle su dinero. El sistema es más diabólico"* GHERSI, Carlos Alberto y MUZIO, Alejandra Esther "Compraventa de automotores por ahorro previo", páginas 26, 27, 29 y 30, Astrea, Bs. As., 1996.

En esa senda resolutive, la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, de la Ciudad de Mar del Plata, dijo ***"Si bien la Suprema Corte Provincial de Buenos Aires ha expresado que: "En materia contractual el resarcimiento del daño moral debe ser interpretado con criterio restrictivo para no atender reclamos que respondan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia jurídica quedando a cargo de quien lo invoca la acreditación precisa del perjuicio que se alega haber sufrido. En tal sentido se requiere la clara demostración de la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica que no pueden ni deben confundirse con las inquietudes propias y corrientes del mundo de los pleitos o de los negocios. (C 111627 S 26-6-2013; Ac 89068 S 18-7-2007; Ac 73965 S 21-3-2001).***

Ahora bien, esa estrictez que exige la jurisprudencia en la valoración y consideración del rubro, debe ceder ante supuestos como el de autos donde es el consumidor -parte débil de la contratación- quien efectúa el reclamo (arts. 42 de la CN, 38 de la CPBA). No estamos frente a un contratante más: **él es un consumidor en una relación de consumo, que hizo necesaria una protección específica para la parte más débil de la estructura negocial que se concreta en la Ley de Defensa del Consumidor que vino a ampliar y profundizar, la tutela ya garantizada por el Código Civil con cuya estructura**

normativa se complementa, y por la Constitución Nacional a través de los arts. 42 y 43 a partir de la reforma de 1994. ASI, el marco constitucional utiliza la expresión "trato equitativo y digno".

En referencia al aspecto social o externo al consumidor, es decir al honor y el respeto que se le debe a la persona. Conceptos estos, cuya lesión claramente llevan al dolor, la angustia, la aflicción y los padecimientos provocados a la víctima por el evento dañoso. *En otras palabras, la privación e disminución de aquellos bienes que tienen un valor incuestionable en La vida del hombre que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual y la integridad individual que constituyen sus más gratos afectos* (cfr. Lowenrosen, Flavio, "La dignidad, derecho constitucional de los usuarios y consumidores", *elDial.com* - DC5F8).

Por ultimo el art. 8 bis de la ley 24.240 también exige a los proveedores garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. La jurisprudencia provincial ha decidido que: **"El daño moral consiste "no sólo en el dolor, padecimiento o sufrimiento espiritual del individuo", sino también en la "privación de momentos de satisfacción y felicidad en la vida del damnificado -víctima o reclamante- y que en definitiva influyen negativamente en la calidad de vida de las personas.**

En consecuencia, solicito se indemnice íntegramente a mi cliente el daño moral causado, otorgándosele una suma de dinero adecuada que le permita recuperar su buen ánimo. -, dejo aclarado que el presente rubro es de exclusiva cuantificación judicial, Se reclama provisoriamente la suma de **\$4.000.000 (Pesos cuatro Millones)**, o lo que en más o en menos estime el prudente arbitrio judicial, con más sus intereses computados a Tasa Activa, costas y depreciación monetaria.

B.- DAÑO PUNITIVO:

Atento al manifiesto incumplimiento contractual, y a las violaciones cometidas por la demandada a los deberes de Información y trato digno, como la colocación en una situación jurídicamente abusiva, considero seriamente vulnerados los derechos de mi cliente como consumidor, y solicito a V.S. tenga a bien condenar a la accionada a pagar un valor a determinar por usted en concepto de daño punitivo, establecido en el Art. 52 bis de la Ley 24.240.-

El daño punitivo ha sido definido como aquellos "otorgados...para castigar al demandado por una conducta particularmente grave, y para desalentar esa conducta en el futuro". También se los define como "sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro (conf.: Pizarro, Ramón D., "Daños punitivos", en "Derecho de Daños", segunda parte, La Rocca, Buenos Aires, 1993, p. 291/292).-

El daño punitivo tiene un propósito netamente sancionatorio de un daño que resulta intolerable, siendo su finalidad punir graves inconductas, y prevenir el acaecimiento de hechos similares. La pena privada está estrechamente asociada a la idea de prevención de ciertos daños y también a la punición y al pleno desmantelamiento de los efectos de ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la mera indemnización resarcitoria de los perjuicios causados (Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D., "Reformas a la ley de defensa del consumidor", LA LEY, 2009-B, 949).-

Si bien la norma sólo exige el incumplimiento por parte del proveedor de sus obligaciones legales o contractuales para con el consumidor, existe consenso dominante en el derecho comparado en el sentido de que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícito o, en casos excepcionales, por un abuso de posición de poder, particularmente cuando ella evidencia menosprecio grave por derechos individuales o de incidencia colectiva (Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D., ob. cit.).

Los daños punitivos son excepcionales, pues proceden únicamente frente a un grave reproche en el accionar del responsable de la causación del daño, frente a supuestos de particular gravedad. Importan una condena "extra" que se impone ante una conducta que se aparta gravemente de aquellos niveles de precaución deseables socialmente.-

En el presente caso, considero que la firma demandada obró y continúa obrando con un objetivo incumplimiento de las exigencias de la ley 24.240, como a las reglas del mandato, como así al fin del contrato que es que el ahorrista obtenga un automóvil para el paga la cuota, la actora salió adjudicada por sorteo del vehículo **Logan Life 1.6** para ellos debía por indicaciones de PLAN ROMBO, ir al concesionario oficial , para realizar el pedido de unidad, sin embargo ese pedido y aceptación llevaba implícito el pago de la deuda por el diferimiento de pago por la medida cautelar del defensor del pueblo de la provincia de Tucumán, en un valor superior a lo establecido por la IGJ y la Excma. Cámara Civil y comercial Sala III , perjudicando únicamente para los suscriptores de los planes de ahorro de la provincia de Tucumán , a lo que se suma su gran negligencia a la hora de fijar de maneta antojadiza y aleatoria , cercana al dolo, al buscar apropiarse de sumas injustamente calculada a los suscriptores de Tucumán, generando así, un enriquecimiento sin causa **MILLONARIO** en desmedro de los consumidores.

Esto causo que la Sra. Cattolica envié una carta documento demostrando fehacientemente su voluntad de aceptar la adjudicación aduciendo, que le cobraban una suma indebida pese al haber pagado las 84 cuotas del plan, y que necesitaba que urgente pusieran su vehículo a disposición, sin embargo hizo PLAN ROMBO caso omiso ocasionando la pérdida del vehículo y la resolución del grupo , liquidando los haberes de sus cuotas

Solicito también a V.S. que a la hora de aplicar y cuantificar los daños punitivos considere el comportamiento procesal de la demandada en el presente juicio. Las pruebas que acompañan a la presente demanda son abrumadoras. La accionada debería buscar reparar el daño ocasionado sin agravarlo por el mero transcurso del tiempo y sin aprovecharse de los obstáculos procesales.-

Estas actitudes no son casuales, son sistemáticas en la demandada, e intentaré probarlo en la etapa procesal oportuna. Estamos ante una actitud ciertamente reprochable de comercializadores profesionales de automóviles frente a un consumidor que, individualmente, carece de significancia económica para el proveedor. Pero, éste modo de actuar frente a miles, o decenas de miles de clientes (consumidores) en conjunto, les generan ganancias tan exorbitantes como ilegales y cuasi delictivas. -

Luego de producirse las pruebas en su totalidad, comprobaremos la existencia de “microdaños” (daños ínfimos para cada consumidor perjudicado que, sumados, resultan jugosas ganancias ilícitas para el proveedor), en el obrar de la demandada. —

Siguiendo la línea de lo expuesto, si de la lectura de los contratos de adhesión que firmo y suscribió con PLAN ROMBOS SA DE AHORROS PARA FINES DETERMINADOS , observamos lo siguiente:

“ARTICULO CLAUSULAS

ESTAN COMPUESTOS POR 168 PERSONAS Y DURAN 84 MESES

*Por ejemplo, **si la duración del plan es de 84 meses el grupo estará conformado por 168 adherentes.** Cada grupo funciona y es administrado en forma independiente (según Condiciones generales del Contrato de Adhesión).*

Es decir, en el caso que nos avoca, teniendo el plan pactado una duración de 84 meses, el grupo y orden N° G7UH020-H, el plan estaba compuesto de 84 cuotas. Este grupo culminó en JULIO de 2023, no existiendo más cuotas y/o vehículos que entregar, por lo cual debería haber terminado la relación entre las partes, sin embargo la Sra. Cattolica perdió su derecho a tener un bien por que pago 84 consecuencia de la suma diferida por cuatelar que pretende cobrar siendo que de las boletas de pago surge que nunca las aplicó PLAN ROMBO, tomemos en cuenta que los ahorristas de Tucumán son cerca de 30.000 según lo informado por el defensor del pueblo, hoy la deuda asciende a MAS \$5.000.000.- por parte de solo 1 ahorrista, generando un enriquecimiento MILLONARIO.

El daño causado a la señora Cattolica es de tal magnitud que perdió el bien que venía pagando y soñaba obtener. PLAN ROMBO OFRECE devolver una suma mucho menor a lo paga siendo un verdadero enriquecimiento sin causa.

Los cobros indebidos, sin justificación a un usuario genera un daño en su economía y en la de su familia, no observar dicha situación demuestra, sin dejar de ponderarse la debilidad material, psicológica y cognoscente, en la que se encuentra el consumidor respecto del proveedor, desventajas todas que deben ser subsanadas mediante una adecuada información por parte de las empresas (administradora y fábrica), siendo palmaria la violación de la administradora a los derechos que como consumidor ostenta el ahorrista, ya que debido a este inconveniente generado exclusivamente por las accionadas, la ahorrista vio mermando su patrimonio sensiblemente por esas erogaciones, violándose de ese modo el artículo 42 de la CN cuando dice: "los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e INTERESES ECONÓMICOS; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

En lo que respecta al valor de la información cabe resaltar que el correcto conocimiento de la realidad le permite al ahorrista apreciar la conveniencia del contrato. Si hubiera datos ocultos o falsificados en la propuesta, se coartaría la voluntad del consumidor, ya que se lo induciría a celebrar un acuerdo al que no hubiera accedido en otras condiciones. Por lo tanto, la información adecuada y veraz se erige como la columna vertebral de las relaciones de consumo (tal cual surge del art. 42 de la Constitución Nacional). Según lo dispuesto por el art. 1100 del Cód. Civil y Com., y de la Ley de Defensa del Consumidor, se debe suministrar de forma cierta y detallada al adherente las condiciones de comercialización de los bienes previsto en el plan (de modo concordante con el principio de buena fe objetiva que rige la celebración, ejecución e interpretación de los contratos; conforme el Art. 961 del Cód. Civ. y Com."

El otorgamiento de Daño Punitivo que aquí solicito, consiste en una reparación que se concede al damnificado no para indemnizarlo por el daño padecido sino para disuadir a la demandada, y a otros, de que intenten conductas similares en lo sucesivo. Siendo que la omisión deliberada de brindar la posibilidad del pago del diferimiento conforme los parámetros de la resolución 14/2020 y lo establecido "DEFENSOR DEL PUEBLO DE TUCUMAN c/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS s/ SUMARISIMO (RESIDUAL)" - Expte. N° 2702/19-I2, en fecha 12 de marzo de 2021.

Del sitio web de ACARA Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) emite mes a mes los valores de los vehículos arroja una valuación del precio del vehículo que se le había adjudicado a la Sra. Cattolica RENAULT LOGAN LIFE 1.6. Tiene un valor de \$22.700.000.- de lo que se colige que la deuda antojadizamente tiene un 25% del valor del vehículo, siendo de modo indirecto violatorio de la resolución 8/15 de la IGJ en su **Artículo 32 - Reglas aplicables a la provisión de bienes** La relación de provisión de bienes entre su fabricante o importador y la entidad administradora, deberá obligatoriamente, además de estar ajustado a lo establecido en el artículo 23, apartado 23.2., punto 23.2.2.1., asegurar el cumplimiento de las pautas siguientes:

32.1. El precio de los bienes que se adjudiquen será equivalente al precio de venta al público sugerido por el fabricante de los mismos.

32.2. Toda bonificación o descuento que efectúe el fabricante a los agentes y concesionarios de su red de comercialización, deberá trasladarse, en las mejores condiciones de su otorgamiento, al precio del bien-tipo a los fines de la determinación de la cuota pura. Las entidades administradoras deberán incluir dichas bonificaciones en la comunicación de precios que presenten en cumplimiento del apartado 16.2. del artículo 16 del Capítulo I..”

Seguendo este orden de ideas los ahorristas de las provincias abonaran un 25% adicional los vehículos adquiridos, en tanto deviene en discriminatorio con el resto de los ahorristas del país. Es por ello que la conducta desplegada por PLAN ROMBO SA de ahorros para fines determinados es escandalosa y deliberada en contra de los ahorristas, y del mandato conferido, lo cual requiere una sanción ejemplar.

Entonces, considero viable solicitar la condena ejemplificadora de la demandada en éste rubro, atento a que confió en su posición privilegiada en el mercado. El consumidor no debe mensurar el daño punitivo al tiempo de su petición, por cuanto su imposición ha sido atribuida exclusivamente al magistrado en cumplimiento de una manda constitucional (art. 42 C. Nac.).-

La incorporación del daño punitivo en ese artículo de la Ley de Defensa de la Competencia es una clara manifestación del estado actual de vinculación entre los mundos antitrust y de protección del consumidor que antes no se observaba tanto (ver comentario al art. 3º LDC en el primer tomo de esta obra). Si bien es el único precepto referido directamente a la figura, se verá en las páginas venideras que su análisis requiere tener presente la Constitución Nacional, otras disposiciones de la propia ley 27.442, la normativa de defensa el consumidor, y, también, ciertas reglas y principios diseminados a lo largo del CCyCN. Todo este "complemento normativo" matizará, precisará o integrará el alcance de estos daños punitivos que consagra la regulación antimonopolio argentina.

Fijar el monto a reclamar en el presente rubro es una tarea delicada, siendo premisas ineludibles: a) que no es un resarcimiento; b) que es una sanción; c) que tiene incidencia la gravedad de la falta; d) que no tiene relación directa y lineal con los rubros indemnizatorios; e) que debe cumplir una función preventiva disuadiendo al infractor de reincidir en conductas análogas. El quid de la cuantificación del daño punitivo radica en una cantidad encuadrable en el concepto de sanción con función estrictamente preventiva que no sea inferior ni superior a la suma necesaria para generar incentivos económicos suficientes en el infractor como para disuadirlo de incurrir en conductas análogas. Se trata de que el deudor internalice las consecuencias de la baja probabilidad de condena, lo que se logra obligándolo a pagar a un damnificado los daños provocados a los demás afectados que no hicieron el reclamo ante la

autoridad jurisdiccional; se compensa con daños punitivos la escasa probabilidad de ser sentenciado. –

“Es importante destacar que la norma menciona no solamente las obligaciones que surgen del contrato, sino también a aquellas que, aunque no incluidas expresamente al instrumentarse aquel (o estándolo, pero de modo parcial o defectuoso), se hallan presentes por el carácter de orden público de la LDC. Por ejemplo, la obligación de trato digno y equitativo prevista en el art. 8° bis de ella. Se trata de una única pauta que resulta bastante clara. Es más, "asusta la claridad", pues permite imponer daños punitivos en todo tipo de casos en que el proveedor falte a sus obligaciones. No se fija ningún tipo de "filtro" al respecto. Como se ve, el margen de apreciación que le queda al juez para evaluar si impone o no daños punitivos es quizás demasiado amplio. Es por ello que cuando estaba recién sancionada, la norma decía que los magistrados jugarían un rol fundamental para ir definiendo el perfil de la nueva figura.” CHAMATROPULOS, DEMETRIO ALEJANDRO, *Los daños...*, cit., 262. Coinciden con nosotros HERNÁNDEZ, CARLOS A. - SOZZO, GONZALO, "La construcción judicial de los daños punitivos. Antecedentes y funciones de la figura en Argentina", *Revista de Derecho de Daños*, 2011, nro. 2 (Daño Punitivo), p. 361.

Es menester recordar que bien se ha sostenido en el III Congreso Euroamericano de Protección Jurídica del Consumidor, que a los fines de determinar el quantum del daño punitivo (y en consecuencia su prueba), debe seguirse como pauta ineludible de interpretación, el listado de recaudos impuestos por el artículo 49 de la ley 24.240. Así, resultará conveniente acreditar: 1.- El perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, 2.- la posición en el mercado del infractor, 3.- la cuantía del beneficio obtenido, 4.- el grado de intencionalidad, 5.- la gravedad de los riesgos o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, 6.- la reincidencia y las demás circunstancias relevantes del hecho.

Sin perjuicio de lo dicho y para seguir generando dudas en torno a la figura, sucederá que en no pocas oportunidades se requerirá la aplicación de lo que he denominado hace algunos años "criterio de tolerancia cero" para la admisión del daño punitivo que algunos, erróneamente, lo han querido identificar con un factor objetivo de atribución. La explicación de este factor subjetivo de atribución agravado es bastante simple: en ciertas actividades, "no hay margen para la falla"; el hecho de que un empresario decida incursionar en una industria determinada lo obliga a asumir ciertas obligaciones, entre las cuales está "la de no equivocarse". Esto porque en ciertos rubros, por lo que están en juego, no puede haber margen de error, pues si el mismo acaece, los daños que se producen pueden ser gravísimos (v.gr. en el campo de la salud). Es por eso que, si un proveedor sabe que en su actividad su margen para fallar es casi nulo, cuando el incumplimiento se produzca, no cabe más que hablar de culpa grave de una manera casi automática. Es decir, el propio incumplimiento

sería la mejor demostración de una actuación que se apartó notoriamente de las reglas de la diligencia debida. Visto así, no es más que una derivación casi natural del art. 1725 del CCyC. **CHAMATROPULOS, DEMETRIO ALEJANDRO, "Daños punitivos sí, daños punitivos no...", LA LEY, 2012-C, 63. El criterio de la "tolerancia cero" en materia de daños punitivos ha sido seguido por alguna jurisprudencia. Ver, por ejemplo: CCiv. y Com. Córdoba 8ª, 8/3/2018, "Atay, Manuel José c. Embotelladora del Atlántico SA s/ordinario - otros", RCYS, 2018-VI, 96; CCiv. y Com. Tucumán, sala II, 27/7/2017, "Esteban, Noelia E. c. Cervecería y Maltería Quilmes SAICAG s/daños y perjuicios", LA LEY, 2017-D, 554; CNCom., sala B, "G. I., T. c. Swiss Medical SA s/ordinario", LA LEY, 2017-A, 81.**

Es evidente la necesidad de los adherentes a plan demandar por sus derechos, en atención a la desnaturalización que hacen las administradoras del plan de ahorros, de dichos contratos. *Desde la llegada al país del sistema la doctrina insistió en subrayar la existencia de conjunto económico entre administradora y fabricante para desenmascarar la realidad negocial y posibilitar al suscriptor responsabilizar por los incumplimientos y los abusos a los verdaderos interesados en el sistema de comercialización que se autofinancia con el ahorro de los adherentes. Fueron esfuerzos doctrinarios y jurisprudenciales porque el derecho positivo no contaba con una norma como el art. 40 de la ley 24.240, ni reconocía la conexidad contractual, como ahora lo hace el Código Civil y Comercial en los arts. 1073 a 1075. Más recientemente se sostuvo que el sistema de ahorro para fines determinados constituye un conjunto de contratos conexos cuyo objeto es la incorporación de un grupo de suscriptores o adherentes que tienen por finalidad adquirir determinados bienes o servicios mediante la intervención de la sociedad de ahorro y préstamo en su calidad de administradora de los fondos que acumula para comprar los bienes de un cierto fabricante y entregarlos en forma periódica a cada uno de los ahorristas. A fin de caracterizar el contrato desde el punto de vista económico social hay que preguntarse si se trata de un contrato de cambio o de colaboración. Tal como se ha visto, en el sistema aprobado por la autoridad de control son contratos de cambio entre el suscriptor y la administradora. En ellos se incluyen cláusulas según las cuales la administradora es mandataria del suscriptor quien le otorga poder irrevocable. Sin embargo, se admite en las normas que sea la administradora la que asume obligaciones y se atribuye derechos respecto del suscriptor. En general, no se aclara que la administradora representa al grupo, por el contrario, actúa en su nombre e interés. Frente a los suscriptores la administradora debería comportarse como una administradora de bienes de terceros y, por tanto, debería cumplir con todas las obligaciones en forma diligente, sin embargo, se comporta como titular de los derechos que ejerce.* NICOLAU, Noemí Lidia en STIGLITZ, Gabriel y HERNÁNDEZ, Carlos (Di-Bs.As.,2015. rectores), "Tratado de Derecho del Consumidor", páginas 376 y 377, Tomo 2, La Ley, Bs.As. 2015.

Los daños punitivos son excepcionales, pues proceden únicamente frente a un grave reproche en el accionar del responsable de causar el daño, frente a supuestos de particular gravedad. Importan una condena "extra" que se impone ante una conducta que se aparta

gravemente de aquellos niveles de precaución deseables socialmente.- el marco económico actual en base a que la Ley de Presupuesto 27701 dicto para este año a partir del 1 de enero de 2023 en su artículo 119. La modificación del piso de los daños punitivos “Artículo 47: Sanciones. Verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido serán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: “ Multa de cero coma cinco (0,5) a dos mil cien (2.100) canastas básicas total para el hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC) “ (Tomando en cuenta los valores actuales de la canasta básica total, tenemos que las multas por infracción a la LDC a partir de la modificación del art. 47, van desde \$73.486,50 hasta un máximo de \$308.643.300, ***pero como a partir de ahora el valor de la multa se mide en canastas básicas total, el valor se irá incrementando año a año y a valores muy elevados, teniendo en cuenta el proceso inflacionario que vive el país***)

Solicito la aplicación de la fórmula de Matías Irigoyen Testa en el mismo sentido que fue aplicada por la Sala II de la Cámara Primera de Apelación del Departamento Judicial de Bahía Blanca en los autos “Cañadas Pérez, María c. Bank Boston NA” en los siguientes términos: “... *los Fundamentos del Proyecto de Ley y del Dictamen de las comisiones de la Cámara de Diputados destacan que ‘Con el daño punitivo se trata de desbaratar la perversa ecuación que aconseja dejar que se produzca un perjuicio pues, en sí, resulta más económico repararlo en los casos singulares que prevenirlo para la generalidad’. La función accesorio de los daños punitivos sería la sanción del dañador, ya que toda multa civil, por definición tiene una función sancionatoria por la circunstancia fáctica de ser una condena en dinero extracompensatoria -la multa civil es sancionatoria en oposición a la indemnización por daños y perjuicios que es compensatoria-* (conf.: Irigoyen Testa, Matías;; *¿Cuándo el juez puede y cuándo debe condenar por daños punitivos?, publicado en Revista de Responsabilidad civil y seguros, La Ley, nro. X, octubre de 2009).*”

Para cuantificar el daño punitivo, el vocal preopinante, Dr. Peralta Mariscal, utilizó la fórmula aritmética propuesta por el Dr. Matías Irigoyen Testa, “en la que se tiene en cuenta el resarcimiento por daños reparables que corresponden a la víctima...y la probabilidad de que un damnificado decida transitar todo el periplo necesario y logre una condena resarcitoria por los padecimientos infligidos, que incluya daños punitivos” siendo la formula por excelencia para el cálculo, solicitamos su aplicación.”

Todos estos puntos serán debidamente probados en la etapa procesal oportuna. Para ello, solicito a V.S. que me permita producir prueba amplia a tal efecto.-

No obstante, lo arriba expresado, dejo aclarado que el presente rubro es de exclusiva cuantificación judicial, por ello, Se reclama provisoriamente la suma de **\$11.000.000 (Pesos once millones)**, o lo que en mas o en menos estime el prudente arbitrio judicial, con más sus intereses computados a Tasa Activa, costas y depreciación monetaria.

C.- DAÑO EMERGENTE:

El daño emergente está constituido por el desmedro económico generado en el patrimonio de mi mandante con motivo de la negativa a la aceptación de la adjudicación por sorteo que ocurrió en autos, esta negativa deliberada y sin sentido por pretender cobrar como “gastos” el diferimiento de la cautelar del defensor del pueblo, pese a que jamás se le aplicó la misma, lo cual surge de las boletas de pago generando deuda calculada en forma unilateral e ilegal por la compañía PLAN ROMBO S.A. DE AHORROS PARA FINES DETERMINADOS en franca violación a la resolución 14/2020 de la IGJ como “DEFENSOR DEL PUEBLO DE TUCUMAN c/ VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTROS s/ SUMARISIMO (RESIDUAL)” - Expte. N° 2702/19-I2, en fecha 12 de marzo de 2021. Causo nada mas y nada menos que la “pérdida del vehículo adjudicado” por la disolución y liquidación del grupo. Por lo cual la actora perdió un automóvil RENAULT LOGAN LIFE. 1.6

“Se considera que el daño emergente comprende la destrucción, privación, deterioro de bienes incorporados al patrimonio del dañado, los gastos y erogaciones que debe enfrentar, es la supresión, sustracción, quebranto, pérdida de una utilidad, beneficio o interés que tenía la víctima” (LA RESPONSABILIDAD CIVIL análisis exegetico, doctrinal y jurisprudencial art: 1708 al 1780 CCN, Tomo II pag.255. ED Rubinza-Culzoni año 2021)

Los cobros indebidos, sin justificación a un usuario genera un daño en su economía y en la de su familia, no observar dicha situación demuestra, sin dejar de ponderarse la debilidad material, psicológica y cognoscente, en la que se encuentra el consumidor respecto del proveedor, desventajas todas que deben ser subsanadas mediante una adecuada información por parte de las empresas (administradora y fábrica), siendo palmaria la violación de la administradora a los derechos que como consumidor ostenta el ahorrista, ya que debido a este inconveniente generado exclusivamente por las accionadas, la ahorrista vio mermando su patrimonio sensiblemente por esas erogaciones, violándose de ese modo el artículo 42 de la CN cuando dice: "los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e INTERESES ECONÓMICOS; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.

El daño citado en el párrafo anterior asciende a la suma de **\$22.704.289** (Pesos **veintidós millones**) **causado** por parte de la firma PLAN ROMBO S.A. DE AHORROS PARA FINES DETERMINADOS, por la liquidación del plan que ocasiono la pérdida del vehículo LOGAN LIFE. 16 debidamente adjudicado. Y NO ENTREGADO-

D.- DAÑO PSICOLOGICO:

El daño de carácter psicológico consiste en la perturbación permanente del equilibrio espiritual preexistente, de carácter patológica, causada por un hecho ilícito, que genera en el sujeto que lo padece la posibilidad de reclamar el resarcimiento o la indemnización de tal concepto contra quien ha ocasionado el daño y debe responder por ello. El daño psicológico no es una afección emotiva espiritual, el padecer de los sentimientos, pues ello encuadra dentro del concepto de daño moral. Se configura mediante la alteración de la personalidad, es decir, una perturbación profunda del equilibrio regulado por el razonamiento, que guarda un adecuado nexo causal con el hecho dañoso.

El daño psicológico suele subsumirse dentro del concepto de daño moral, pero en este caso resulte menester diferenciarlos, puesto que tal menoscabo no se presume, y a diferencia de aquel no sólo puede ser objeto de comprobación científica, sino que inclusive, debe tratarse.

El Daño Psicológico es inferido al accionante en tanto representa una alteración a la salud, no limitada al aspecto físico. Y, por tanto, susceptible no tan sólo de ser indemnizada, sino tratada mediante un procedimiento de curación a cargo de un psicólogo que alivie los dolores emocionales, y los efectos del shock postraumático que la han afectado seriamente.

Desde una perspectiva jurídica debemos precisar que históricamente se concibió, ser humano desde una perspectiva bi-partita y no desde la arista tripartita que pregonaba la ciencia moderna. Es decir, se contemplaba a la persona solo desde su espectro psicofísico y a través del análisis del mismo, es que se llegaba a determinar la cuantificación del padecimiento, pero se olvidaba del aspecto social que forma parte de ese campo resarcible.

La Organización Mundial de la Salud ha definido a la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no tan solo la ausencia de enfermedad o afección. El hombre debe ser considerado como una unidad bio-psico-social (concepción tripartita). Desentrañando los alcances de cada término que compone la estructura del ser humano, podemos señalar que bio se refiere a que constituye un organismo vivo que pertenece a la naturaleza, la dicción psico tiene que ver con su aspecto abstracto mental, y la palabra social alude a las influencias favorables y desfavorables del entorno humano como resultado de la interacción con la sociedad que lo rodea y con el medio ambiente físico en el cual lleva a cabo su vida. La integridad psicofísica y social de una persona puede ser vulnerada de

distintas maneras que son previstas en la segunda parte del art. 1738 del CCCN donde se expresa que "la indemnización (...) incluye especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan dela interferencia en su proyecto de vida" En base a este razonamiento, resulta resarcible la lesión a la integridad física, la lesiona la integridad psíquica y la lesión a la integridad social.

Tanto el daño moral como el daño psíquico se configuran en la psique, donde se establece la organización o modelo de la lógica, genéricamente primero y mediante la escolarización después. El daño psicológico es el desajuste del flujo de esos diferentes elementos que intervienen en el montaje de la inteligencia y el pensamiento. tura interna de la línea circundante de información-conocimiento, impidiendo progreso, y cuyos efectos se acumulan y producen una mutación en la racionalidad. , El concepto de lesión a la psiquis no resulta técnico-científico, y por ello es abarcativo de la afectación neurológica, psiquiátrica y psicológica. En el Código Civil y Comercial no quedan dudas de que ha adquirido autonomía conceptual toda vez que el art. 1746 se refiere a este de manera específica como rubro resarcitorio, escindiéndolo de los daños extrapatrimoniales previstos en el art. 1741.

El daño psíquico puede diferenciarse del daño moral pues el primero afecta el razonamiento, mientras que el segundo repercute en el sentimiento.

La Sra. Católica ha padecido problemas de sueño, angustia, depresión y, especialmente un temor paralizante por pasar situaciones de zozobra motivados en que la actitud despectiva que PLAN ROMBO SA DE AHORROS en su contra hizo que pierda el automóvil adjudicado siendo que perdió 84 meses de abono de un vehículo que jamás tendrá.

Se pondera provisoriamente el monto reclamado en el aludido concepto en la suma de \$4.000.000- (Pesos seis Millones), - lo que en más o en menos resulte de las probanzas de autos o supla el prudente arbitrio judicial, con más intereses computados a Tasa Activa, costas y depreciación monetaria.

VI.-) PLANILLA:

Daño Emergente: \$22.704.809

Daño Moral: \$ 4.000.000

Daño Punitivo: \$11.000.000

Daño Psicológico: \$4.000.000

Total: \$41.704.809

VII.-) PRUEBA:

A.-DOCUMENTAL:

- Contrato de Adhesión.-
- Boletas de pago Meses enero diciembre 2.017,2018,2019,2020,2021,2022,2023 y enero a junio 2024
- Notificación de adjudicación por carta común
- Notificación de adjudicación por carta documento
- Carta documento de aceptación de adjudicación
- Carta documento de rechazo de liquidación de plan
- Carta documento de liquidación de grupo
- Informe de deuda de Ruiz automotores SA
- Sentencia de cautelar defensor del pueblo
- Resolucion 14/20 de la IGJ
- Precio vehículo por sitio ACARA

B.-DOCUMENTAL EN PODER DE TERCEROS:

Por la presente denuncio que la solicitud de adhesión original firmada por el Sr. CATOLICA JOANA ELIZABETH DNI 36.838.287 obra en poder de la empresa plan rombo S.A. de Ahorros para fines Determinados, con domicilio en calle fray justo santa maria de oro °1744 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por tal motivo solicito en la etapa procesal oportuna V.S. libre oficio a los fines de que se sirva a remitir la misma.

VII.-) SOLICITA MEDIDA CAUTELAR

En virtud de lo expuesto atento a que la Sra. CATTOLICA JOANA ELISABETH, perteneciente del grupo y orden N° G7UH020-H, la actora salió sorteada , salió sorteado en el Acto de adjudicación DE MAYO DE 2024 y que siguiendo expresadas instrucción por las cartas enviada por PLAN ROMBO SA DE AHORROS PARA FINES DETERMINADOS , se dirigió al concesionario RUIZ

AUTOMOTORES sin que dicha empresa, le tomare su “aceptación” por aducir que faltan requisitos (pago de cautelar del defensor del pueblo) en los términos Dicte medida cautelar en los términos de los Arts. 1710, 1711, 1712 y 1713 del CCyC ordenando la “entrega inmediata “ del vehículo RENAUL LOGAN LIFE 1.6 , **a fin de evitar la perdida del derecho a su adjudicación y disposiciones del bien objeto del contrato por circunstancias no prevista en el contrato.**

La tutela cautelar solicitada busca “impedir que la pretensión principal, por efecto del transcurso del tiempo, carezca de eficacia al momento de dictarse un pronunciamiento definitivo en la causa” (“Toricelli, Alberto O. c/ Estado Nacional s/ Amparo”, Juzgado Federal N° 1 de Rosario).-

a) .- Verosimilitud del Derecho:

La verosimilitud del derecho se encuentra acredita en forma incuestionable en el caso de marras, en **primer lugar la Sra. CATTOLICA JOANA ELISABETH, perteneciente al grupo**, N° G7UH020-H como así salió sorteado en el Acto de adjudicación *Estimado Cliente, su contrato ha sido adjudicado y este es el momento en que podrá juntarse con su OKM. Estos son los datos referentes a su adjudicación. MODELO ASR5 360. PLAN 100% FECHA DE ADJUDICACION 06 DE MAYO DE 2024, GANADO POR SORTEO” ... ¿ YA ELIGIO EL COLOR DE SU VEHICULO? ¿CONOCE LOS MODELOS QUE TENEMOS A SU DISPOSICION? POR QUE AHORA LE TOCA ELEGIR. El Okm esta a solo un paso y depende de USTED: la aceptación de la adjudicación.*

A partir de esta misiva se el intercambio epistolar desde las instrucciones y luego la aceptación que desconoció PLAN ROMBO SA DE AHORROS a tal punto que ordeno liquidar el grupo, se adjuntan prueba de ellos en intercambio de todo mes de mayo-junio de 2024

Por último, sostengo que la verosimilitud del derecho se encuentra acreditada en el caso de marras, y es procedente el dictado de una medida cautelar toda vez que salió sorteada la Sra. Cattolica y se le impide su adjudicación y entrega del Bien objeto del Plan de Ahorro. Violando así el orden público que campea en la materia y el rango constitucional de los derechos invocados (arts. 42, 72, inc. 23 de la CN, 1, 2, 35, 36 de la Ley 24240

b) Peligro en la demora

El peligro en la demora surge de la boleta N° 84 ya abonada y de la carta documento n° 2927000038 de fecha 10 de julio de 2024 que ordena liquidar el grupo , la cual hizo caso omiso a la aceptación y al rechazo a la liquidación del grupo y en, sin que la Sra. Cattolica tenga su vehículo no por capricho o desidia, sino por negativas infundadas del accionado.

Siendo que como es de público conocimiento una vez terminado el contrato se hacen las entregas de fondos a los ahorristas que no se les adjudico el bien con descuentos sumamente graves que causara un perjuicio al actor, que mes a mes abono las cuotas de manera puntual.-

En razón de lo expuesto en el párrafo anterior, la necesidad del dictado de una medida cautelar es URGENTE ya que el derecho adquirido por el Sra. Cattolica le está siendo impedido de ser por cuestiones ajenas al contrato y que causaran en la culminación del contrato sin que el actor posea su bien causando un graven irreparable en su economía y en el fin del contrato,. Siendo esta la “causalidad” que amerita el dictado de la medida solicitada.

c) daño irreparable

el objeto de estas medidas cautelares innovativas suma un requisito que se trata del perjuicio irreparable *La tutela innovativa busca evitar un perjuicio irreparable que, de subsistir una tardanza en la resolución, el daño al consumidor será mucho mayor que el ya ocasionado y la sentencia definitiva no tendrá sentido porque no logrará reparar lo acaecido.* Identificamos al perjuicio irreparable en que el actor abono las 84 del plan de ahorro para la obtención del vehículo RENAULT LOGAN LIFE 1.6 *MODELO ASR5 360. PLAN 100%* , siendo que es un gran monto de dinero ya abonado por el actor,. Según volantes de pago en su totalidad que se acompañan emitido por la firma PLAN ROMBO S.A. DE AHORROS PARA FINES DETERMINADOS. Por lo que el no hacer la entrega del bien objeto del contrato causa un daño irreparable al actor, sin que obtenga el bien, el actor habrá tirado a un saco roto el pago de las cuotas y el derecho de adjudicación.

d) habilitación de días y horas

por el presente atento a la CARTA DOCUMENTO n° 2927000038 de fecha 10 de julio de 2024 que ordena liquidar el grupo pese a la aceptación del sorteo de mayo de 2024 y se rechazo por cuestiones ajenas a la actora su aceptacion

Es por ello que solicitamos la medida cautelar que ordene a la accionada PLAN ROMBO S.A. DE AHORROS PARA FINES DETERMINADOS. Que entregue el Bien vehículo RENAULT LOGAN LIFE 1.6. correspondiente al modelo *MODELO ASR5 360. PLAN 100%* por medio del RUIZ AUTOMOTORES S.A.” cito en calle 24 de septiembre 741 d esta ciudad, indicando que no requiere ni garantes ni pago de medida cautelar del defensor del pueblo de Tucumán en atención a que el Sra. Cattólica tiene su propio proceso como consumidor.

Asimismo informo que la presente medida cautelar no se identifica con el fondo de la cuestión de este proceso, que se persigue una reparación integral de daños derivados de los bastos incumplimientos a la Ley 24240 y los decretos reglamentarios de la IGJ

VIII.-) BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS - JUSTICIA GRATUITA-ORDINARIZACIÓN DEL PROCESO

Dispone el art.53 de la Ley de Defensa del Consumidor: *“Normas del proceso: “En las causas iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción del tribunal ordinario competente, a menos que a pedido de parte el Juez por resolución fundada y basado en la complejidad de la pretensión, considere necesario un trámite de conocimiento más adecuado. Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley representando un derecho o interés individual, podrán acreditar mandato mediante simple acta poder en los términos que establezca la reglamentación. Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio. Las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o interés individual gozarán del beneficio de la justicia gratuita. La parte demandada podrá acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.”*

Solicito se apliquen las normas del proceso ordinario, dada la complejidad probatoria que implica la acción incoada. Conforme a mis circunstancias personales arriba detalladas, solicito se me otorgue el beneficio de justicia gratuita, tal como lo establece el Art. 53 de la Ley 24.240.-

El art. 53 de la Ley n° 24240, según texto de la ley 26.361, dispone que las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con aquella ley en razón de un derecho o un interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita. La remoción de obstáculos de orden patrimonial para la promoción de reclamos o defensa del consumidor -con base en la relación de consumo- se erige en principio fundante de la mentada legislación protectoria y constituye una herramienta necesaria, conveniente y razonable para garantizarle al consumidor una pronta y efectiva tutela de sus derechos que gozan de rango constitucional (el art. 42 CN dispone que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos).- La finalidad del beneficio de justicia gratuito es posibilitar al consumidor el acceso a los tribunales disminuyendo las barreras que obstan a un reclamo o defensa efectiva.-

IX.-) PETITORIO:

Por lo expuesto a V.S. solicito:

- A. Que se me tenga por presentado en el carácter invocado, por acreditada la personería y dándoseme la intervención de ley, con el domicilio legal constituido, y se le imprima el trámite de **JUICIO ORDINARIO**.-
- B. Que se corra traslado de la demanda por el término y bajo apercibimiento de ley.-
- C. Se haga lugar a la medida cautelar solicitada.-
- D. Se tramite el proceso por las normas establecidas para los juicios ordinarios.-
- E. Que oportunamente se haga lugar al **BENEFICIO DE JUSTICIA GRATUITA** solicitado,
- F. Se fije fecha de audiencia, se abra la presente causa a prueba, y producida la misma se dicte SENTENCIA, condenando a la parte demandada a indemnizar, todo con gastos y costas a la demandada.-
- G. Dígnese V.S. proveer de conformidad.

**PROVEER DE CONFORMIDAD
JUSTICIA.-**